

**EL REGLAMENTO UE 2201/2003 RELATIVO A LA COMPETENCIA
JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE NULIDAD,
SEPARACIÓN Y DIVORCIO Y MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD
PARENTAL: PROBLEMAS DE APLICACIÓN.**

**EU REGULATION 2201/2003 CONCERNING INTERNATIONAL
JURISDICTION IN MATTERS OF NULLITY, SEPARATION AND
DIVORCE AND PARENTAL RESPONSABILITY MEASURES:
APPLICATION PROBLEMS.**

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Presentado por:

D^a ANDREEA CRISTINA CRAIU

Dirigido por:

Dra. MONTSERRAT GUZMÁN PECES

Alcalá de Henares, a 8 de Febrero de 2019.

RESUMEN

La elaboración de este trabajo se centra en el análisis y la evolución de la normativa sobre la competencia judicial internacional en materia de separación judicial y divorcio. En esta línea, se examina el ámbito de aplicación de los Reglamentos y normativa interna correspondiente, con el objetivo de destacar la confusión generada por la redacción del conjunto de sus artículos. Asimismo, se hace referencia al esfuerzo realizado por las instituciones por reforzar la cooperación jurídica del derecho internacional privado.

PALABRAS CLAVE

Competencia judicial internacional, separación y divorcio, normativa interna, Reglamentos, cooperación jurídica.

ABSTRACT

This project focuses on the analysis and evolution of the rules on international jurisdiction on judicial separation and divorce. Therefore, we will examine the application of the Regulations and the appropriate internal regulations, with the aim of highlighting the confusion generated by the drafting of all of its articles. Also, we will refer to the efforts made by the institutions in order to strengthen legal cooperation on private international law.

KEY WORDS

International jurisdiction, judicial separation and divorce, internal regulations, Regulations, legal cooperation.

ÍNDICE

RESUMEN.....	2
PALABRAS CLAVE.....	2
ABSTRACT.....	2
KEY WORDS.....	2
ÍNDICE	3
I. Introducción.....	4
II. Competencia judicial internacional y crisis matrimoniales.....	5
2.1 Análisis de la Aplicación del Reglamento 2201/2003 (CE) de 27 noviembre de 2003... 5	
A) Estudio comparativo de los textos del Artículo 22 de la Ley orgánica del Poder Judicial y Artículos 3, 4 y 5 del Reglamento (CE) 2201/2003.....	31
B) Reconocimiento de resoluciones en la separación y divorcio. Los efectos en España de las sentencias extranjeras de separación y divorcio.....	40
2.2 Análisis de la Aplicación del Reglamento 2016/1103 (UE) de 24 de junio de 2016.....	43
A) Aspectos generales.....	43
B) Análisis respecto a la competencia judicial internacional.....	47
C) Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones y documentos públicos y transaccionales.....	50
IV. Conclusiones.....	53
V. Bibliografía.....	57

I. INTRODUCCIÓN

Este Trabajo de Fin de Máster es una ampliación del Trabajo Fin de Grado. Hemos querido analizar de una manera más específica el modo de aplicación de un fenómeno que sigue generando un gran debate en el ámbito de Derecho Internacional Privado. Nos referimos al estudio de la competencia judicial internacional en materia de separación y divorcio. Es necesario analizar estas crisis matrimoniales dada la complejidad que presentan: la diversidad de los Derechos Estatales, los conflictos de civilizaciones, así como el aumento de los divorcios en el mundo.

Es un tema novedoso ya que la actualidad de nuestro tiempo nos ha llevado cada vez más a la existencia de matrimonios mixtos. Esto es consecuencia de uno de los principales objetivos de la Unión Europea, que es el de crear espacio de libertad, seguridad y justicia para garantizar la libre circulación de las personas. Para ello, desde las instituciones de la UE se está promoviendo una cooperación judicial cada vez mayor, por medio de una serie de instrumentos jurídicos en asuntos civiles con proyección “transfronteriza”, para conseguir el buen funcionamiento del mercado interior.

El cuerpo del presente trabajo está estructurado en dos capítulos que a su vez engloban dos epígrafes y termina con un apartado final de conclusiones. Para realizar este trabajo hemos utilizado normativa vigente comunitaria junto, con el derecho interno de cada Estado. En el primer capítulo hemos analizado, el Reglamento (UE) 2201/2003 sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial, comparándolo con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder judicial. En el segundo capítulo hemos realizado un estudio de las principales novedades y objetivos del reciente Reglamento (UE) 2016/1103 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, mencionando sus principales objetivos y novedades.

II. Competencia judicial internacional y crisis matrimoniales.

2.1 Análisis de la Aplicación del Reglamento 2201/2003 (CE) de 27 noviembre de 2003.¹

El Reglamento (CE) núm. 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental desplaza desde el 1 de marzo de 2005 al Reglamento (CE) núm. 1347/2000, de 29 de mayo de 2000 («Bruselas II»), “*que a su vez <<comunitarizó>> el texto del Convenio de 28 de mayo 1998 (DOCE núm. C 221 de 16 julio 1998), texto que nunca llegó a entrar en vigor*”.²

Tiene su fundamento jurídico en el artículo 65 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

En palabras de Abarca Junco: “*el objetivo del presente Reglamento es uniformar las normas de competencia de los Tribunales de la Unión Europea, facilitar el reconocimiento de las resoluciones y evitar procedimientos paralelos en diferentes Estados miembros en materia de divorcio, nulidad, separación*”³.

En Derecho Internacional Privado, el término “*competencia judicial internacional*” comprende cómo cada Sistema jurídico confiere a sus Jueces y Tribunales la facultad de conocer de los negocios procesales de carácter transfronterizo que puedan suscitarse en cada Estado miembro.⁴

En ese sentido, el Derecho Internacional General, si bien resulta claro que no impone límites concretos al ejercicio de la jurisdicción, existen no obstante dos excepciones a este principio general:⁵

En primer lugar, nos encontramos con el *Principio de territorialidad*; según este principio, el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado ha de realizarse

¹ Vid. R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 (en adelante me referiré a este Reglamento como Bruselas II *bis*). A parte de los cambios con respecto a sus antecedentes (reemplazo del Reglamento CE nº. 1347/2000) ha sido objeto de una leve modificación a través del Reglamento del Consejo nº. 2116/2004, de 2 de diciembre de 2004, que tiene por objeto salvar la vigencia del Acuerdo existente entre la Santa Sede y Malta (DO L 367, de 14 de diciembre de 2004).

² Cf. A. L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado Vol. II*, Granada, Editorial Comares (octava edición), 2007, pp. 130 y 131.

³ A.P., Abarca Junco (Dir.), *et alii*, *Derecho Internacional Privado*, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2008, Vol. I pp. 536 y 537, y Vol. II, pág. 156.

⁴ Cf. J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica del tráfico transfronterizo en España (Análisis crítico de la nueva ordenación)*, Liceus Derecho, 2016, pág. 50.

⁵ *Ibidem*.

dentro de los límites territoriales sometidos a la soberanía del estado. Por ello, su ejercicio extraterritorial sólo puede ponerse en funcionamiento cuando se halle expresamente consentido por el Estado afectado en un Tratado internacional.⁶

En segundo lugar, el artículo 14⁷ del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 6⁸ del Convenio Europeo de Derechos Humanos desprenden una “prohibición de denegar justicia” cuando disponen en su articulado “*el derecho de toda persona a ser oída por un tribunal imparcial*”. No obstante, el hecho de que un tribunal se declare incompetente porque las normas que delimitan la jurisdicción en su país no le atribuyen competencia para asumir un asunto concreto, no debe confundirse con una denegación de justicia.⁹

En el derecho español, la entrada en vigor del Bruselas II *bis* ha tenido gran repercusión respecto al procedimiento de la separación judicial y el divorcio. Debido a ello, estas materias disfrutaban de un doble régimen en el derecho internacional privado español¹⁰.

Por lo que respecta al ámbito de aplicación material, Bruselas II *bis* contiene normas sobre competencia, reconocimiento y ejecución en asuntos civiles; es aplicable a todo procedimiento público civil, sea judicial o no lo sea, relativo a crisis matrimoniales. Además, presenta las siguientes cuestiones excluidas:

- a) Los procedimientos de nulidad matrimonial, divorcios o separaciones que revisten carácter religioso; Si bien su artículo 63 salvaguarda los Acuerdos de los Estados con la Santa Sede, como es el caso del Concordato del Estado español¹¹.

⁶ J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica...*, opus cit., pág. 51.

⁷ El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: [...] “*Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil*”.

⁸ El artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dispone: “*Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil* [...]”.

⁹ J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica...*, opus cit., pp. 51 y 52.

¹⁰ A.P., Abarca Junco (Dir.), “*Derecho Internacional Vol. IP*” ..., opus cit., pág. 156.

¹¹ *Ibidem*, opus cit., pág. 157.

- b) Cuestiones conexas al divorcio, nulidad o separación, tales como las causas de divorcio, el régimen económico matrimonial o las obligaciones de alimentos y pensiones post-divorcio;
- c) La disolución de las parejas de hecho.
- d) La determinación de la Ley aplicable¹² a las crisis matrimoniales¹³.

El mencionado Reglamento, es aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea salvo en Dinamarca. Es directamente aplicable en los Estados miembros donde es vinculante¹⁴ y constituye el régimen preferente para determinar la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles en las causas matrimoniales de divorcio, separación judicial y nulidad del matrimonio¹⁵, sobre la legislación nacional¹⁶.

En este contexto, la SAP León de 27 de noviembre de 2015 en su FD Segundo¹⁷, resuelve la competencia judicial internacional en un asunto de divorcio de nacionalidad portuguesa. En la sentencia se proclama la competencia de los tribunales españoles mediante lo dispuesto en el artículo 22.3 de Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ). Del mismo modo, se cita el artículo 21 LOPJ mediante el cual, los tribunales españoles se atribuyen la competencia en un asunto cuando concurre algún elemento de extranjería. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta lo dispuesto en los tratados internacionales.

En ese sentido, el artículo 288 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE) establece: “*El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada*

¹² Esta cuestión está excluida del presente trabajo, ya que la ley aplicable a la separación y divorcio es razón de estudio del Reglamento (UE) 1259/2010 (R (UE) núm. 1259/2010 del Consejo, de 29 de diciembre de 2010).

¹³ Cf. A-L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González “*Derecho Internacional Vol. II*” ..., *opus cit.*, pp. 131 y 132.

¹⁴ Comisión Europea, “Guía Práctica para la aplicación del Nuevo Reglamento Bruselas II”, Unión Europea, 2014. En lo sucesivo, me referiré a este documento como Guía práctica. La Comisión ha desarrollado una importante labor en la interpretación y aplicación del Bruselas II *bis*, así como, en la detección de posibles lagunas y desperfectos que pueda presentar.

¹⁵ Recordemos que nuestro trabajo sólo abarcará la competencia judicial internacional en materia de separación y divorcio, excluyendo en este caso, la nulidad matrimonial.

¹⁶ Vid. J.C., Fernández Rozas y S., Sánchez Lorenzo, *Derecho Internacional Privado*, Navarra, Editorial Civitas (novena edición), 2016, pág. 449.

¹⁷ SAP León de 27 de noviembre de 2015 nº203/2015, FJ2 ap. a) relativo a la competencia judicial internacional §§ 1 y 2.

Estado miembro ".¹⁸ En consecuencia: “*El Derecho de la Unión Europea se incorpora como Derecho interno por la eficacia vinculante de los tratados*”.¹⁹

Por esta razón, debe ser el Reglamento Bruselas II *bis*, el que se aplique en materia de separación y divorcio²⁰ y no la norma de Derecho interno²¹, porque un Reglamento de la Unión Europea posee eficacia vinculante para el Estado español y sus instituciones y se rige por el principio de prevalencia.²²

En cuanto al inicio de su práctica, Bruselas II *bis* comienza a aplicarse²³, a partir del 1 de marzo de 2005 abarcando veinticuatro Estados miembros de la Unión Europea y con posterioridad, en los nueve Estados miembros, a partir de su fecha de adhesión. En el caso de Bulgaria y Rumanía, a partir del 1 de enero de 2007 y en el caso de Croacia, a partir del 1 de julio de 2013. El reglamento se aplicará en todos sus elementos a acciones judiciales ejercitadas, documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados y a los acuerdos entre partes posteriores a su fecha de aplicación.²⁴

En el ámbito de la competencia judicial no existe un supuesto de aplicación. El juez, una vez que recibe las demandas de separación o divorcio con alcance internacional, tendrá que referirse al Reglamento. En ese caso, será labor del Bruselas II *bis* indicar en qué ocasión y de qué manera es competente él, cuando lo será el derecho interno, incluso profundizando en su modo de aplicación. Del mismo modo, el presente Reglamento mostrará los casos de inaplicación del derecho interno incluso si no hay competencia por parte de ningún tribunal comunitario de acuerdo con los foros de competencia previstos en su artículo 3.²⁵

Por lo que respecta a los criterios de competencia en materia matrimonial mencionados *supra*, el Reglamento Bruselas II *bis*, en su artículo 3 enumera siete criterios de competencia, que serán analizados con mayor profundidad en el apartado siguiente.

¹⁸ Cf. SAP León de 27 de noviembre de 2015 n°203/2015, FJ2 ap. a) § 3.

¹⁹ Vid. artículo 96 de la Constitución Española y artículo y artículo 1.5 del Código Civil.

²⁰ Ya que regula la competencia judicial internacional en materia de separación y divorcio.

²¹ Sería competente por el artículo 22. 3 de la LOPJ.

²² Cf. SAP León de 27 de noviembre de 2015 n°203/2015, FJ2 ap. a) § 3.

²³ R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 se adoptó el 27 de noviembre de 2003, entró en vigor el 1 de agosto de 2004 para preceptos sobre organización e infraestructura de la administración judicial (artículos 67 a 70) pero no se aplicó en su totalidad hasta el 1 de marzo de 2005.

²⁴ Cf. Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pág. 5.

²⁵ A.P., Abarca Junco (Dir.), “*Derecho Internacional Vol. II*” ..., *opus cit.*, pág. 157.

Los cónyuges pueden presentar una demanda de divorcio en los órganos jurisdiccionales del Estado:

- a. en cuyo territorio se encuentre su residencia habitual,
- b. en cuyo territorio se encuentre su último lugar de residencia habitual, siempre que uno de ellos aún resida allí,
- c. en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual de uno de los cónyuges, en caso de demanda conjunta,
- d. en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual del demandado,
- e. en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual del demandante, si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda,
- f. en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual del demandante, en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro²⁶, o
- g. de nacionalidad de ambos cónyuges (en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del <<domicile>> o domicilio legal común).²⁷

El artículo 3 del Bruselas II *bis*²⁸ establece las normas de competencia en materia matrimonial que deben seguir los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro para conocer si es competente en el asunto. Sin embargo, se deja a elección cada Estado miembro, qué órgano jurisdiccional es competente en materia de separación y divorcio, basándose en su legislación interna²⁹.

En materia matrimonial, los criterios de competencia son alternativos. Esto quiere decir en palabras de Caravaca y Carrascosa, citando a Salerno “*son foros auténticamente <<alternativos>>: no hay prevalencia entre unos y otros foros y ninguno de ellos es <<excepcional>>*”.³⁰

²⁶ En este mismo sentido J.C., Fernández Rozas y S., Sánchez Lorenzo (directores), “*Derecho Internacional*” ..., *opus cit.*, pág. 450, con el fin de facilitar la presentación de la demanda al cónyuge que, tras la ruptura, regresa a su país, limitando al mismo tiempo la introducción de un *forum actoris* desmesurado, el Reglamento contempla asimismo la posibilidad de atribuir competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde reside el demandante” en los supuestos mencionados *ut supra*.

²⁷ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pág. 11, manifiesta lo estipulado en el artículo 3 del R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

²⁸ SAP Palmas de Gran Canaria (Las) de 20 de diciembre de 2017 nº 1492/2017 FD2, con respecto a la enumeración de los criterios para establecer que un Estado miembro de la Unión Europea tiene competencia para conocer de una demanda de divorcio.

²⁹ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pág. 9.

³⁰ A-L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González “*Derecho Internacional Vol. IP*” ..., *opus cit.*, pág. 133. También, SAP Palmas de Gran Canaria (Las) de 20 de diciembre de 2017 nº 1492/2017 Fundamento de Derecho Segundo § 6, AAP de Barcelona de 13 de marzo de 2008 nº 626/2018 Fundamento de Derecho Primero y AAP de Tarragona de 18 de mayo de 2018 nº 515/2018

Además, el hecho de que los foros sean alternativos, aumenta las probabilidades de obtener la disolución del matrimonio, favoreciendo de este modo, el acceso a la Justicia del demandante de divorcio³¹.

En opinión de Caravaca y Carrascosa, también puede llegar a ser criticable por dos razones, la primera al fomentar sorprendentemente el “*Forum Shopping*”³², citando a Mayer y Heuzé, *ya que las normas de conflicto sobre divorcio son diferentes en cada Estado miembro*”, incluso dando pie al nacimiento de los denominados “<<divorcios Eurostar>>”, y segundo, porque Bruselas II bis, en determinados casos “*otorga competencia a los Tribunales de un Estado miembro muy escasamente vinculado con el supuesto, dando pie a un competencia internacional “<<imprevisible>> para los cónyuges y el foro se convierte en exorbitante*”³³.

A la hora de analizar los criterios de competencia como alternativos hemos considerado oportuno analizar la STJUE (Sala Tercera), de 16 de julio de 2009, conocida como sentencia “*Hadady*”³⁴, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo a los artículos 68 CE y 234 CE, por la Cour de cassation (Francia), mediante resolución de 16 de abril de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de abril de 2008, en el procedimiento entre Laszlo Hadadi (Hadady) y Csilla Marta Mesko, esposa de Hadadi (Hadady).

El presente litigio³⁵ tiene su precedente en el matrimonio de dos húngaros que emigraron a Francia adquiriendo la doble nacionalidad, es decir, húngaro-francesa. Ulteriormente, el marido (Laszlo Hadidi [Hadady]) presentó una demanda de divorcio ante los tribunales húngaros y la esposa (Csilla Marta Mesko [Hadady]) presentó otra ante los tribunales franceses. Los tribunales húngaros

analizan el artículo 3 del Reglamento Bruselas II bis, en concreto, sus foros alternativos y sin ninguna jerarquía entre ellos.

³¹ A-L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González “*Derecho Internacional Vol. IP*” ..., *opus cit.*, pág. 133

³² También, la AAP de Lleida de 18 de octubre de 2018 nº 531/2018 FD Segundo señala que el objetivo del artículo 17 del Reglamento Bruselas II bis es evitar este fenómeno (*forum shopping*), o sea, “*que el demandante acuda a la jurisdicción del Estado de la Unión Europea cuya legislación considere que será más favorable a sus intereses*”.

³³ A-L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González “*Derecho Internacional Vol. IP*” ..., *opus cit.*, pág. 134.

³⁴ STJUE, 16 julio 2009, as. C-168/08, Laszlo Hadadi (Hadady) vs. Csilla Marta Mesko. Básicamente en el resumen sentencia, los cónyuges con doble nacionalidad pueden presentar la demanda de divorcio en el Estado que prefieran. También, Sentencia analizada también por J. C., Fernández Rozas y P. A., De Miguel Asensio, *Derecho Internacional Privado. Textos y Materiales*, Navarra, Civitas (séptima edición), 2018, págs. 582-588.

³⁵ STJUE, 16 julio 2009, as. C-168/08, §§ 16-22.

fueron los primeros en pronunciarse sobre el divorcio, días después de la adhesión de Hungría a la Unión Europea³⁶. Por lo que los tribunales franceses consideraron no reconocer esta sentencia, alegando la falta de competencia del tribunal húngaro luego que la residencia habitual de los cónyuges estaba en Francia. Contra esta resolución el Sr. Hadidi interpuso recurso de casación contra el auto de la Cour d'appel de Paris, reprochando a esta última haber excluido la competencia del tribunal húngaro basándose exclusivamente en el artículo 3, apartado 1 a), del Reglamento Bruselas II *bis*, relativo a la residencia habitual de los cónyuges; a saber, sin haber examinado si tal competencia podía resultar de nacionalidad húngara pertenecientes a ambos cónyuges, tal como prevé el apartado b) del articulado.³⁷

En este sentido se plantearon tres cuestiones prejudiciales³⁸ al Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

- a) en el caso de que los cónyuges posean conjuntamente la nacionalidad del Estado del órgano jurisdiccional que conoce del litigio y la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, ¿tendría que prevalecer la nacionalidad del Estado del órgano jurisdiccional que conoce del litigio³⁹?
- b) si se deniega la primera cuestión prejudicial, en el caso de poseer ambos cónyuges dos nacionalidades cada uno y que además pertenezcan a los dos mismos Estados miembros, ¿se tendría que interpretar de la misma disposición⁴⁰ anteriormente expuesta, que será designada la nacionalidad más efectiva de ambas nacionalidades?
- c) Se plantea una tercera cuestión prejudicial en el caso de que se rechace la segunda cuestión prejudicial. Si los cónyuges podrían ostentar a una opción adicional conforme a la disposición⁴¹ mencionada

³⁶ STJUE, 16 julio 2009, as. C-168/08, § 19 dispone que “*El 4 de mayo de 2004, es decir, con posterioridad a la adhesión de Hungría a la Unión europea, que tuvo lugar el 1 de aquel mismo mes, fue pronunciado el divorcio entre el Sr. Y la Sra. Hadadi mediante sentencia del Tribunal de Pest. En la resolución de remisión consta que la mencionada sentencia se convirtió en firme.*”

³⁷ Cf. STJUE, 16 julio 2009, as. C-168/08, § 22.

³⁸ STJUE, 16 julio 2009, as. C-168/08, § 23.

³⁹ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pág. 11 respecto de la primera cuestión prejudicial planteada, si puede presumirse aplicado el foro de la nacionalidad común de los cónyuges en casos de nacionalidad múltiple (artículo 3.1 b) del Reglamento de Bruselas II *bis* a las circunstancias mencionadas en el texto.

⁴⁰ *Ibidem*, en la segunda cuestión prejudicial planteada.

⁴¹ *Ibidem*, pág. 12, en la tercera cuestión prejudicial.

entendiéndola como posible vía de elección para ejercitar la acción ante los órganos jurisdiccionales de uno u otro pertenecientes a los dos Estados cuya nacionalidad ostentaban ambos cónyuges.

Concretamente el fallo del Tribunal estima lo siguiente:

a) Sobre la cuestión prejudicial primera:

“Cuando el tribunal del Estado miembro requerido deba verificar, en aplicación del artículo 64⁴², apartado 4, del Reglamento nº 2201/2003, si el tribunal del Estado miembro de origen de una resolución judicial habría sido competente en virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento, la última disposición se opone a que el tribunal del Estado miembro requerido considere que son nacionales únicamente del Estado miembro requerido unos cónyuges que poseen ambos tanto la nacionalidad de dicho Estado miembro requerido como la nacionalidad del Estado miembro requerido. Dicho órgano jurisdiccional deberá, por el contrario, tener en cuenta el hecho de que los cónyuges poseen igualmente la nacionalidad del Estado miembro de origen y que, por lo tanto, los tribunales de este último podrían haber sido competentes para conocer del litigio⁴³”.

Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera:

“[...]procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que, cuando cada uno de los cónyuges posea la nacionalidad de dos mismos Estados miembros, el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 2201/2003 se opone a que se excluya la competencia de los tribunales de uno de dichos Estados miembros por el mero hecho de que el demandante carezca de otros puntos de conexión con dicho Estado. Antes al contrario, los tribunales de los Estados miembros cuya nacionalidad posean los cónyuges son competentes en virtud de la citada disposición, pudiendo estos últimos elegir libremente el tribunal del Estado miembro ante el que se sustanciará el litigio⁴⁴”.

Ello viene a decir según la Comisión⁴⁵, “*que el órgano jurisdiccional tuvo que decidir si existía una jerarquía, pues ambos cónyuges eran nacionales de los dos mismos Estados miembros*”

Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo⁴⁶ interpretando la STJUE (Sala Tercera), de 16 de julio de 2009 comentan:

La sentencia “*Hadaday*” “ha interpretado el sentido del foro de la nacionalidad común de los cónyuges en caso de nacionalidad múltiple, partiendo de la inexistencia de un concepto jurídico autónomo de <<nacionalidad>> en el ámbito comunitario; Además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea niega que deba tratarse de una nacionalidad <<efectiva>> que exista añadir otros criterios de proximidad, admitiendo la competencia concurrente de los tribunales de todos los Estados miembros correspondientes a las diversas nacionalidades de los cónyuges, a su elección. Este mismo criterio debe servir para valorar la competencia judicial

⁴² Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pp. 5-6, realiza un cuadro explicativo sobre normas transitorias, con el fin de ayudar a la interpretación del Reglamento analizando el artículo 64 del Bruselas II *bis*.

⁴³ STJUE, 16 julio 2009, as. C-168/08, § 43.

⁴⁴ STJUE, 16 julio 2009, as. C-168/08, § 58.

⁴⁵ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pág. 11.

⁴⁶ J.C., Fernández Rozas y S., Sánchez Lorenzo, “*Derecho Internacional*” ..., *opus cit.*, pág. 450.

indirecta en el reconocimiento de decisiones, en aquellos supuestos transitorios en que proceda de conformidad con el artículo 64. 4º del Reglamento”.

Los foros de competencia además de ser alternativos, se conocen como excluyentes⁴⁷. Siempre y cuando se cumplan las condiciones de cualquiera de ellos el tribunal ante el que se presente la demanda deberá conocer del divorcio o la separación.⁴⁸ El artículo 6 del Reglamento Bruselas II *bis* regula el carácter exclusivo de los foros de competencia y en palabras de Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo⁴⁹ “*en determinados supuestos, el Tribunal únicamente puede declararse competente sobre la base de dichos foros, sin que quepa, en ningún caso, el recurso alternativo a cualesquiera otros foros de competencia recogidos en textos convencionales o regímenes internos.*” Dicho lo cual, Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo, citando a Esplugues Mota, describe que “*la 'exclusividad' no hace referencia a la naturaleza de los foros —que en realidad son concurrentes entre sí—, sino a su aplicación*”.⁵⁰ Por consiguiente, el carácter exclusivo de los foros se produce siempre que el cónyuge requerido dispone de su residencia habitual o nacionalidad de un Estado miembro o que tiene su “*domicile*” en el Reino Unido o Irlanda, únicamente podría ser demandado en otro Estado miembro si así se prevé de las normas establecidas en los artículos 3 al 5 del Reglamento Bruselas II *bis*.⁵¹

En el caso de que el tribunal ante el que se presente la demanda no fuera competente conforme a los foros del Reglamento, pero sí lo fuera otro tribunal comunitario el primero se declarará de oficio incompetente⁵². En atención a lo cual, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea manifestó en base al artículo 17 del Reglamento Bruselas II *bis*, que el órgano jurisdiccional del Estado miembro

⁴⁷ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pág. 14, aclara respecto al artículo 6 del Reglamento Bruselas II *bis*: “*que un foro tenga carácter exclusivo significa que un cónyuge con residencia habitual en un Estado miembro o 'domicile' en el Reino Unido o Irlanda, únicamente podría ser demandado en otro Estado miembro a raíz de lo que establece los artículos 3 al 5 del Reglamento*”.

⁴⁸ SAP Palmas de Gran Canaria (Las) de 20 de diciembre de 2017 nº 1492/2017 FD3 dispone: “*El artículo 3 de dicho Reglamento viene a establecer siete foros de competencia excluyentes y alternativos, pues no existe jerarquía entre ellos. [...] cuando se cumpla las condiciones de cualquiera de ellos, el tribunal ante el que se presente la demanda deberá conocer del divorcio y separación [...]*”.

⁴⁹ J.C., Fernández Rozas y S., Sánchez Lorenzo, “*Derecho Internacional*” ..., *opus cit.*, pág. 450.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² A.P., Abarca Junco (Dir.), “*Derecho Internacional Vol. II*” ..., *opus cit.*, pág. 158, también la Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pp. 12-14, describe la situación de competencia amparada en el artículo 17 del R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

al que se le presente una demanda y éste no fuese competente de acuerdo con lo estipulado en los foros de competencia del presente Reglamento (artículos 3, 4 y 5⁵³) en cambio, si es competente otro Estado miembro, el primer Estado miembro se declarará incompetente.⁵⁴

En el mismo sentido la AAP de Lleida de 18 de octubre de 2018⁵⁵ dispone: [...] *“en virtud de lo establecido en el artículo 17 del mencionado Reglamento, el Tribunal ante el que se inicia el procedimiento debe examinar de oficio su competencia internacional.”*

Del mismo modo, nos parece interesante reflejar la opinión que la Prof. Marí José expresa con respecto a la importancia de la comprobación de la competencia que un juez de origen debe realizar de oficio, sin que sea indispensable que una parte lo indique. Además, hay que tener en cuenta *“la sensibilidad de los ordenamientos internos hacia los temas matrimoniales internas de los Estados miembros [...] sumado a [...]“la gran diferencia entre las normativas internas de los Estados miembros y el juego que ofrecen las normas de conflicto de leyes aplicables, ya que, resultaría “fácil imaginar que el carácter optativo de los criterios de competencia pudiera llevar a alguno de los cónyuges a tratar de presentar su demanda en materia matrimonial ante los tribunales de un Estado que, [...] aplicasen un ordenamiento más favorable a sus intereses”.*⁵⁶

Y si ningún tribunal comunitario fuera competente, el tribunal ante el que se presentó la demanda conocerá conforme a sus foros de competencia interna⁵⁷ siempre y que el demandado no sea nacional comunitario o “domiciliado” en un Estado miembro, ni por supuesto residente (sería competente un tribunal

⁵³ El artículo 3 del R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, regula siete foros alternativos de competencia judicial internacional: los primeros cinco basados en la residencia habitual de los cónyuges; el sexto combina la residencia habitual con la nacionalidad o “domicile” en Irlanda o Reino Unido y el séptimo está basado en la nacionalidad común. El artículo 4 permite que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro conocedor de la demanda fundada en algún foro del artículo 3, igualmente sea conocedor de la posible demanda reconvenzional. Por su parte, el artículo 5 permite que el órgano jurisdiccional del Estado miembro que ha dictado sentencia de separación judicial será competente también en el caso de la conversión de la resolución de separación judicial en divorcio, siempre y cuando la ley de dicho Estado miembro así lo predice.

⁵⁴ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pp. 12-13.

⁵⁵ AAP de Lleida de 18 de octubre de 2018 nº 531/2018 en su Fundamento de Derecho segundo.

⁵⁶ *Ibidem*. El informe explicativo que la Prof. Marí Jose respecto del Convenio de Bruselas de 1968 con arreglo al artículo k.3 del Tratado de la Unión Europea es aplicable, por constituir las bases del Reglamento 2201/2003.

⁵⁷ Análisis de criterios residuales de competencia, artículo 7 del R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

comunitario). En estos casos no podrán utilizarse los foros de competencia internos. Así pues, un nacional o “domiciliado” comunitario sólo podrá ser demandado conforme a los foros del Reglamento y, si no se cumplieran las condiciones de ninguno de ellos, el demandante habrá de esperar a que se cumplan para poder instar una demanda.⁵⁸

En el caso de que el derecho interno fuera aplicable (porque el demandado no fuera nacional comunitario y ningún tribunal comunitario fuera competente conforme a los foros del Reglamento) el demandante nacional comunitario puede utilizar los foros de derecho interno del país de su residencia al igual que si fuera nacional de ese Estado, prevaleciendo así de las ventajas que los foros internos otorguen a sus nacionales.⁵⁹

Expuesto lo anterior, es clara la problemática que ostenta la aplicación del Reglamento Bruselas II *bis* a una situación de crisis matrimonial dando lugar al estudio de diversas posturas doctrinales en nuestro país del texto comunitario y su posible “confusión o contradicción”⁶⁰ a la hora de referirse a las crisis matrimoniales. Por ende, hemos creído conveniente citar las opiniones de algunos autores a raíz del estudio efectuado para poder entender mejor la redacción de las normas del Reglamento del cual se desprende cierta confusión y polémica. Así se desprende, por ejemplo, del análisis efectuado por Quiñones Escámez⁶¹ y Orejudo Prieto de los Mozos⁶² dónde abordan el tema de la aplicación e interpretación del Reglamento Bruselas II *bis* y también nos dirige a otras posturas doctrinales existentes al respecto.

Principalmente manifiestan la cuestión de la aplicación del citado Reglamento y el concepto de competencias con carácter exclusivo y alternativo en la materia matrimonial han ocasionado desde su comienzo, desconcierto y críticas universalizadas referente a la redacción del articulado. Como consecuencia del desconcierto, diversas posturas doctrinales en nuestro país y en

⁵⁸ Cf. A.P., Abarca Junco (Dir.), *Loc. Cit.*

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 158-159.

⁶⁰ A. Quiñones Escámez, “¿Cuándo se aplica el Reglamento Bruselas II bis? El TJCE se pronuncia sobre su ámbito de aplicación”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 30, Mayo/Agosto, 2008, pág. 465, considera que el Reglamento Bruselas II *bis* responde de forma “confusa” en incluso “contradictoria” a la hora de aplicarse a las crisis matrimoniales.

⁶¹ A. Quiñones Escámez, “Cuándo se aplica el Reglamento” ..., *opus cit.*, pág. 465

⁶² P. Orejudo Prieto de los Mozos, “Diez años de aplicación e interpretación del Reglamento Bruselas II bis sobre crisis matrimoniales y responsabilidad parental (análisis de los aspectos de competencia judicial internacional)”, *La Ley. Unión Europea*, núm. 21, 2014.

otros Estados miembros han planteado problemas en la práctica, además los tribunales oscilan dudas a la hora de la aplicación del Reglamento Bruselas II *bis*, incluso elevándose recursos prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En atención a lo cual es de menester citar la *STJUE* (Sala Tercera), de 29 de noviembre de 2007, conocida como Asunto “*Sundelind*”⁶³, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo a los artículos 68 CE y 234 CE, por el Högsta domstolen (Suecia), mediante resolución de 7 de febrero de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de febrero de 2007, en el procedimiento entre Kerstin Sundelind López vs. Miguel Enrique López Lizazo.⁶⁴ Esta sentencia es de suma importancia porque tiene como finalidad la aclaración hecha por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para del funcionamiento de los preceptos 6 y 7 del Reglamento Bruselas II *bis*.

El resumen de esta sentencia sería: Kristin Sundelind, de nacionalidad sueca solicita disolución de matrimonio contra Miguel Enrique López, de nacionalidad cubana, ante los tribunales suecos. Dato importante para resaltar es que la última residencia habitual de los cónyuges es en Francia y Kristin Sundelind seguía residiendo en Francia cuando interpuso la demanda de divorcio y su marido residía en Cuba. Sin embargo, su demanda fue desestimada por considerar que la competencia la tienen los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro, en este caso, Francia, a tenor del artículo 3.1 a)⁶⁵ del Bruselas II *bis* y considerar inaplicables las normas de competencia suecas al caso, teniendo en cuenta lo estipulado por el artículo 7 del mencionado Reglamento.⁶⁶

El TJUE dio la razón a los tribunales suecos después de responder: “*Los artículos 6 y 7 del Reglamento n.º 2201/2003*⁶⁷,[...] *deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un asunto de divorcio, cuando el demandado no tiene su residencia habitual en un Estado miembro y no es nacional de un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden fundar*

⁶³ STJUE, 29 noviembre de 2009, as. C-68/07, Kerstin Sundelind López vs. Miguel Enrique López Lizazo.

⁶⁴ Sentencia analizada también por J. C., Fernández Rozas y P. A., De Miguel Asensio, *Derecho Internacional Privado*, opus cit., págs. 578-581.

⁶⁵ Recordemos que Francia es el último lugar de residencia habitual de los cónyuges y dónde aún sigue residiendo la demandante.

⁶⁶ STJUE, 29 noviembre de 2009, as. C-68/07, §§ 10 y 11.

⁶⁷ R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

*su competencia en su Derecho nacional para resolver dicha demanda si los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro son competentes con arreglo al artículo 3 de dicho Reglamento.”*⁶⁸

Ahora bien, en opinión de Quiñonez Escámez⁶⁹ si se da el caso de un demandado “no comunitario” (nacional y residente en un Estado tercero) y que ningún Estado Miembro fuera competente según el Reglamento Bruselas II *bis*. En estas circunstancias el mencionado Reglamento, sin prescindir de la posibilidad de su ámbito de aplicación, predice lo siguiente: “*si los criterios de competencia del reglamento no la atribuyen a los EEUU (Estados Miembros), el Estado Miembro consultado podrá conocer del divorcio internacional, en virtud de sus normas internas, que se aplicarán en defecto de o de manera subordinada. Las normas internas se ven, de este modo, ‘comunitarizadas’.*”⁷⁰

De manera que se aprecia el carácter *erga omnes* del texto comunitario que nos ocupa. Por ello merma la idea de que el presente Reglamento no determina la existencia de una conexión comunitaria para aplicarse, excepto que se entienda que esta conexión la otorga el Estado miembro del foro, obligado a aplicar porque forma parte de su derecho interno.⁷¹

Por último, Quiñonez Escámez⁷² considera “*criticable la ‘comunitarización de las normas internas’ y su permanencia frente al demandado no-comunitario (nacional y residente en un Estado tercero) cuando no ocurre un criterio de competencia del reglamento, por cuanto va a permitir la puerta a competencias exorbitantes para tales demandados.*”⁷³

Es considerable la opinión de la Prof. Orejudo Prieto de los Mozos que describe la problemática a la hora de aplicar las normas de competencias. Concretamente expresa que el artículo 17 del Bruselas II *bis*⁷⁴ no ha predicho una solución cuando los tribunales de un Estado miembro ante el que se presenta demanda precisan de competencia de acuerdo a los artículos 3 al 5 del citado Reglamento, y, o no se encuentran autorizados conforme a las normas de competencia judicial internacional de fuente estatal, o no disponen competencia

⁶⁸ STJUE, 29 noviembre de 2009, as. C-68/07, fallo.

⁶⁹ A. Quiñones Escámez, “Cuándo se aplica el Reglamento” ..., *opus cit.*, pág. 467.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² A. Quiñones Escámez, “Cuándo se aplica el Reglamento” ..., *opus cit.*, pág. 467.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ Analizado en el Asunto “Sundelind”, *vid.* nota 44.

conforme a las normas de competencia judicial internacional establecidas en las normas internas, y además ningún otro Estado miembro tiene otorgada competencia conforme a lo previsto en el mencionado Reglamento.⁷⁵

También Caravaca y Carrascosa⁷⁶ declaran confusos y contradictorios los artículos 6 y 7 del Reglamento de Bruselas II *bis*. Así extraen dos reglas que vienen a decir:

-Por una parte, que el art. 6 del presente Reglamento establece que un cónyuge que tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro o bien sea nacional de un Estado miembro, o tenga su “domicile” en el Reino Unido o Irlanda, sólo podrá ser demandado ante los tribunales de otros Estado miembro en virtud de los foros contenidos en el Reglamento. Si los cónyuges residen en un Estado miembro, su nacionalidad es irrelevante a efectos de precisar la competencia internacional y el Bruselas II *bis* se aplica, por supuesto, aunque se trate de ciudadanos no comunitarios.⁷⁷

-Por otra parte, el art. 7.1 del presente Reglamento determina en el caso de que ningún órgano jurisdiccional de ningún Estado miembro resultare competente en base al Reglamento, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro pueden declararse competentes a través de los foros contenidos en sus normas internas⁷⁸.

En opinión de Caravaca y Carrascosa, el art. 7.1 del citado Reglamento, está diseñado para favorecer a los sujetos que ostentan la nacionalidad de un Estado miembro pero cuyo divorcio es imposible en la Unión Europea de acuerdo con las normas de competencia del Bruselas II *bis*, porque dicho texto comunitario no atribuye competencia judicial internacional a ningún tribunal de ningún Estado miembro. En consecuencia, el art. 7.1 del Reglamento “*trata de evitar una ‘denegación de Justicia’ y permite utilizar los foros de competencia judicial internacional previstos en las normas de producción interna de cada Estado miembro respecto de sus ‘nacionales’*”. De este modo se evita también el problema de que los tribunales de un ‘tercer Estado’ no tengan competencia judicial internacional para conocer del litigio y el problema derivado del hecho de que

⁷⁵ Cf., P. Orejudo Prieto de los Mozos, “Diez años” ..., *opus cit.*, § 24.

⁷⁶ Cf., A. L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González, “*Derecho Internacional Privado Vol. II*” ..., *opus cit.*, pp. 132 y 133.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ Cf., A. L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González, “*Derecho Internacional Privado Vol. II*” ..., *opus cit.*, pp. 132 y 133.

*tales tribunales puedan dictar una sentencia de divorcio que sea inefectiva en la UE.”*⁷⁹

En resumen, cada Estado tiene la capacidad de decidir declararse competente, en caso de que el demandante ostente la nacionalidad de dicho Estado o de un tercer Estado.

Por su parte, el artículo 16⁸⁰ del Reglamento Bruselas II *bis* relativo a la determinación del momento en que se inicia un procedimiento de carácter matrimonial, también ha sido objeto de debate en diferentes asuntos.

En este sentido, al *ATJUE* (Sala Sexta) de 22 de junio de 2016 en el as. C-173/5016 se le plantea la siguiente petición de decisión prejudicial:

«¿Debe interpretarse que “el momento en que se [presenta ante un órgano jurisdiccional] el escrito de demanda”, en el sentido del artículo 16, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 2201/2003, es:

a) el momento de recepción del escrito de demanda por el órgano jurisdiccional, aun cuando, de conformidad con el Derecho nacional, el procedimiento no se inicie inmediatamente como consecuencia de esa mera recepción; o

b) el momento en el que, una vez recibido el escrito de demanda, se inicia el procedimiento de conformidad con el Derecho nacional?»⁸¹

Para resolver a esta petición, el Tribunal de Justicia comienza declarando que, el artículo 16 del referido Reglamento incluye una definición autónoma del momento en que ha de considerarse que se ha presentado una demanda. Continúa relatando que, la intención del legislador de la Unión es que se tenga en cuenta un concepto uniforme del momento de inicio de un procedimiento que se establece, *“según el sistema procedimental considerado, mediante la realización de un único acto, a saber, la presentación del escrito de demanda o la notificación, pero que, no obstante, tiene en consideración la realización efectiva del segundo acto posteriormente.”*⁸²

Además, el Tribunal de Justicia ha contemplado según lo estipulado en el artículo 16.1 a) del Reglamento Bruselas II *bis* lo siguiente:

⁷⁹ Cf., A. L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González, “*Derecho Internacional Privado Vol. II*” ..., *opus cit.*, pp. 132 y 133.

⁸⁰ Vid. artículo 16 del R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

⁸¹ Vid. *ATJUE* (Sala Sexta) de 22 de junio de 2016 en el as. C-173/5016, §15 sobre litigio principal y cuestión prejudicial.

⁸² Cf., *ATJUE* de 22 de junio de 2016 as. C-173/5016, §25.

“la iniciación del procedimiento no precisa que se cumplan dos requisitos, a saber, la presentación del escrito de demanda o documento equivalente y su notificación o traslado al demandado, sino uno sólo, la presentación del escrito de demanda o documento equivalente. A tenor de esta disposición, esa mera presentación inicia el procedimiento, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para la notificación o traslado de dicho escrito o documento al demandado [...] para comprobar dicho requisito, no se tendrá en cuenta la lentitud debida al sistema judicial del foro, sino únicamente la falta de diligencia del demandante”.⁸³

El Tribunal termina declarando que el artículo 16.1 a) del mencionado Reglamento “*debe interpretarse en le sentido de que el <<momento en que se [presenta ante un órgano jurisdiccional] el escrito de demanda o documento equivalente>>, con arreglo a dicha disposición, es el momento en que dicha presentación tiene lugar ante el órgano judicial de que se trate, aun cuando esa presentación no inicie por sí misma, de manera inmediata, el procedimiento según el Derecho nacional.*”⁸⁴

El artículo 19 del Reglamento Bruselas II *bis* resuelve la problemática de *litispendencia*, es decir, cómo se podría proceder cuando se presentan demandas en dos Estados miembros.

Con relación a la *litispendencia*, podemos citar la *STJUE* (Sala Tercera), de 6 de octubre de 2015 en el asunto C-489/14⁸⁵ que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 19, apartados 1 y 3, del Reglamento Bruselas II *bis*. Dicha petición ha sido presentada en el marco de un litigio como consecuencia del divorcio de las partes.⁸⁶ Antes de entrar a evaluar la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a continuación, vamos

⁸³ Cf., ATJUE de 22 de junio de 2016, as. C-173/5016 §§ 26 y 27.

⁸⁴ Vid. fallo de ATJUE de 22 de junio de 2016, as. C-173/5016 §§ 26 y 27.

⁸⁵ STJUE, 6 de octubre de 2015, as. C-68/07, A vs. B. Esta sentencia tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Reino Unido), mediante resolución de 31 de octubre de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de noviembre de 2014, en el procedimiento entre A vs. B.

⁸⁶ La Sra. A. y el Sr. B, ambos nacionales franceses, se casaron en Francia el 27 de febrero de 1997 tras concluir un contrato matrimonial, según el Derecho francés, en régimen de separación de bienes. El matrimonio y sus dos hijos, gemelos nacidos el 27 de julio de 1999, se instalaron en el Reino Unido en 2000, donde nació su tercer hijo, el 16 de julio de 2001. En junio de 2010, el demandado en el asunto principal abandonó el domicilio conyugal, y los cónyuges viven separados de hecho desde entonces. En paralelo al procedimiento de separación promovido por el demandado en el asunto principal en Francia, la demandante en el asunto principal presentó el 19 de mayo de 2011 una solicitud de alimentos para los hijos a su cargo a la Child Support Agency.

a reflejar las ideas principales de la petición de decisión prejudicial planteada por la Hugh Court of Justice (England and Wales), Family Division (Reino Unido) y las Conclusiones del Abogado General, P. Cruz Villalón presentadas el 8 de septiembre de 2015 al respecto.

Tal y como manifiesta el Abogado General, el presente caso ofrece al Tribunal de Justicia su primera ocasión para examinar, en circunstancias muy específicas ligadas a la dualidad del procedimiento de «crisis matrimonial» en Francia, las reglas de litispendencia establecidas por el Reglamento Bruselas II *bis*.

Por lo que respecta al objeto del litigio, las cuestiones planteadas ante el Tribunal de Justicia se basan, según el tribunal remitente, en una situación de “*conflicto de competencias que sería exclusivamente imputable a las maniobras abusivas del demandado en el asunto principal y que juzga lamentable, se refieren en esencia al concepto «se establezca la competencia», en el sentido del artículo 19 del Reglamento n° 2201/2003.*” También, se plantea como asunto principal un problema de litispendencia con amparo al artículo 19 del citado Reglamento, sin embargo, la intención del tribunal remitente no es otra que, la interpretación del concepto de “*«órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera [demanda]», en el sentido de los artículos 16 y 19 del Reglamento no 2201/2003, lo que debe permitir que el Tribunal de Justicia responda a los interrogantes del tribunal remitente, como mostraré a lo largo de mi exposición*”.⁸⁷

Dicho esto, las conclusiones prejudiciales el procedimiento ante el tribunal de Justicia son las siguientes:

«1) ¿Qué debe entenderse por la expresión “se establezca” la competencia, en el sentido del artículo 19, apartados 1 y 3 [del Reglamento no 2201/2003]:

a) cuando la parte demandante no lleva a cabo prácticamente ninguna actuación en el procedimiento del que conoce el tribunal ante el que se presentó la primera demanda (“primer procedimiento”), después de la primera audiencia ante él, y, en particular, no promueve el emplazamiento de la parte demandada antes de vencer el plazo para formular la demanda, de modo que el primer procedimiento caduca, sin que se dicte una resolución, por el transcurso del plazo, de conformidad

⁸⁷ Cf., TJUE Conclusiones del Abogado as. C-489/2014, A. vs. B., de 8 de septiembre de 2015, §§ 1 y 2.

con la legislación nacional (francesa) aplicable al primer procedimiento, a saber, treinta meses desde que se practiquen las primeras diligencias procesales;

b) cuando el primer procedimiento caduca, según lo arriba indicado, poco tiempo después (tres días) de que se inicie en el Reino Unido el procedimiento ante el tribunal que conoce de la segunda demanda (“segundo procedimiento”), con la consecuencia de que no se dicta sentencia en Francia y no existe, por lo tanto, el riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables en el primer y en el segundo procedimiento, y

c) cuando, debido al huso horario del Reino Unido, la parte demandante en el primer procedimiento, una vez caducado éste, tiene siempre la posibilidad de presentar una demanda de divorcio en Francia antes de que la parte demandante [en el segundo procedimiento] pueda presentarla en el Reino Unido?

2) En particular, ¿debe interpretarse la expresión “se establezca” la competencia en el sentido de que la parte demandante en el primer procedimiento ha de llevar a cabo, con la debida diligencia y celeridad, las actuaciones necesarias para impulsar el primer procedimiento a fin de que se resuelva el litigio (por resolución judicial o por acuerdo), o bien en el sentido de que la parte demandante en el primer procedimiento, una vez que se establezca la competencia del tribunal que ha elegido con arreglo a los artículos 3 y 19, apartado 1, puede abstenerse de emprender actuación alguna para la resolución del litigio en el primer procedimiento, pudiendo paralizar de este modo el segundo procedimiento y dejar en punto muerto el litigio en su conjunto?»⁸⁸

Según el Abogado General, es menester una serie de aclaraciones respecto a las particularidades del asunto principal. Pues bien, en este litigio los demandantes tienen nacionalidad francesa; por lo que respecta a la competencia internacional, el tribunal francés sería competente para conocer de este asunto respecto de la demanda de separación (el 30 de marzo de 2011) con arreglo al artículo 3.1 a) del Reglamento Bruselas II *bis*, como, de la demanda de divorcio (17 de junio de 2014) presentada por él también. Además, ambos cónyuges tenían su residencia habitual en el Reino Unido, los tribunales de este Estado miembro también son internacionalmente competentes para resolver sobre su divorcio, conforme al artículo 3.1 a) del citado Reglamento.⁸⁹

⁸⁸ Cf., TJUE Conclusiones del Abogado as. C-489/2014, A. vs. B., de 8 de septiembre de 2015, §24.

⁸⁹ *Ibidem*, §72.

Del relato de los hechos se evidencia que el demandado en el asunto principal es el primero en presentar una demanda de separación ante un tribunal francés (el 30 de marzo de 2011). Sin embargo, el tribunal del Reino Unido, ante el que la demandante en el asunto principal presentó demanda de divorcio (24 de mayo de 2011), fue el segundo en conocer del asunto, y por tanto debía suspender el procedimiento conforme al artículo 19, apartado 1, del Reglamento n° 2201/2003, en tanto no se estableciera la competencia del tribunal francés.⁹⁰

Por último, el tribunal francés ante el que se presentó la primera demanda se declaró competente en el auto de no conciliación dictado el 15 de diciembre de 2011 para resolver sobre la demanda de separación formulada por el demandado en el asunto principal, e invitó al mismo tiempo a las partes a iniciar el procedimiento de separación. Esto dio lugar, a que la High Court of Justice inadmitiera la demanda de divorcio de la demandante en el asunto principal el 7 de noviembre de 2012 con arreglo al artículo 19.1 del Reglamento Bruselas II *bis*.⁹¹

Por todo lo dicho, el Abogado General concluye que, al menos durante esa primera fase del desarrollo del litigio, el asunto principal evolucionó respecto a las reglas de litispendencia enunciadas en el artículo 19 del Reglamento 2201/2003. Por consiguiente, se produciría litispendencia al presentarse una demanda de divorcio en un Estado miembro y en paralelo se formula una demanda de separación en otro Estado miembro, pues las reglas del artículo 19 del citado Reglamento, sólo exige la identidad de partes y no una estricta identidad de objeto y causa de dichas demandas.⁹²

En este caso, tanto el asunto principal como las cuestiones del tribunal remitente no se corresponden con la primera fase del desarrollo del asunto principal antes mencionado. Sin embargo, sí corresponden con la segunda fase del desarrollo del asunto principal, esto es, la demanda de divorcio. En conclusión, es la demanda de divorcio presentada (13 de junio de 2014) por la demandante en el

⁹⁰ Cf., TJUE Conclusiones del Abogado as. C-489/2014, A. vs. B., de 8 de septiembre de 2015, §73.

⁹¹ *Ibidem*, §74.

⁹² *Ibidem*, §§ 75 y 76.

asunto principal, la que originó el procedimiento de remisión prejudicial al tribunal de Justicia.⁹³

Para terminar, el Abogado General concluye respecto a las cuestiones prejudiciales, lo siguiente:

“la pregunta del tribunal remitente se refiere exclusivamente a la cuestión de si el Reglamento no 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que la competencia del tribunal francés, debidamente establecida en el sentido del artículo 19 de ese Reglamento para conocer de la demanda de separación presentada por el demandado en el asunto principal el 30 de marzo de 2011, debe considerarse como «aún» establecida en las circunstancias del asunto principal y si el tribunal remitente debe, por tanto, suspender el procedimiento de divorcio promovido ante él por la demandante en el asunto principal el 13 de junio de 2014, y, en su caso, inhibirse a favor del tribunal francés.”

Es más, el Abogado General, aconseja una nueva reformulación de las dos cuestiones prejudiciales planteadas, así:

«¿Deben interpretarse los artículos 16 y 19 del Reglamento no 2201/2003 en el sentido de que, en las circunstancias del asunto principal: — cuando ha caducado un procedimiento de separación iniciado ante un tribunal de un primer Estado miembro y — cuando se han presentado paralelamente dos demandas de divorcio, la primera ante un tribunal de otro Estado miembro poco antes de la fecha de la caducidad del procedimiento de separación, y la segunda ante el tribunal del primer Estado miembro poco tiempo después de esa misma fecha de caducidad, se ha de considerar establecida la competencia del tribunal del primer Estado miembro para conocer de la demanda de divorcio?»⁹⁴

En este contexto, las disposiciones del artículo 19.1 y 3 del Reglamento del presente Reglamento no permiten por sí solas resolver el problema de litispendencia que surge en una situación como la del asunto principal, marcada por la dualidad del procedimiento de «crisis matrimonial» en Francia y por la iniciación en dos Estados miembros diferentes de procedimientos paralelos de divorcio poco antes e inmediatamente después de la caducidad de un procedimiento de separación. Así pues, según explica el Abogado General, la

⁹³ Cf., TJUE Conclusiones del Abogado as. C-489/2014, A. vs. B., de 8 de septiembre de 2015, §§77 y 80.

⁹⁴ Cf., TJUE Conclusiones del Abogado as. C-489/2014, A. vs. B., de 8 de septiembre de 2015, §89.

mejor solución debería resolver si cabe considerar que ciertamente <<se inició el procedimiento>> ante el tribunal del Reino Unido (el 13 de junio de 2014), en el sentido del artículo 16 del citado Reglamento.⁹⁵

Para finalizar con las conclusiones, el Abogado General aporta las siguientes afirmaciones⁹⁶:

-en primero lugar, citando las conclusiones del Abogado General Jääskinen en el asunto Weber, la prioridad de competencia resulta consecuencia de un criterio cronológico, el cual conduce necesariamente a favorecer a la parte que actúa con mayor rapidez para presentar su demanda ante el tribunal de un Estado miembro.

-en segundo lugar, para responder a las cuestiones planteadas por el tribunal de Reino Unido, debemos interpretar los artículos 16 y 19 del Reglamento en le sentido de que en circunstancias como las del asunto principal, esto es:

“cuando ha caducado un procedimiento de separación iniciado ante un tribunal de un primer Estado miembro y, cuando se han presentado paralelamente dos demandas de divorcio, la primera ante un tribunal de otro Estado miembro poco antes de la fecha de la caducidad del procedimiento de separación, y

-la segunda ante el tribunal del primer Estado miembro poco tiempo después de esa misma fecha de caducidad, se debe considerar no establecida la competencia del tribunal del primer Estado miembro para conocer de la demanda de divorcio.”

Para determinar si existe una situación de litispendencia el Tribunal de Justicia en la *STJUE* (Sala Tercera), de 6 de octubre de 2015 en el asunto C-489/14, antes mencionada, resuelve:

Por lo que respecta a los procedimientos de separación y de divorcio sustanciados entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de dos Estados miembros, el artículo 19, apartados 1 y 3, [...] debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, en la que el procedimiento ante el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda en el primer Estado miembro se ha extinguido después de que se presentara la segunda demanda ante un

⁹⁵ Cf., TJUE Conclusiones del Abogado as. C-489/2014, A. vs. B., de 8 de septiembre de 2015, §§98 y 101.

⁹⁶ *Ibidem*, §§116 y 117.

órgano jurisdiccional en el segundo Estado miembro, han dejado de concurrir los criterios de la litispendencia y, por tanto, la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda debe considerarse no establecida.⁹⁷

En este mismo orden de ideas, la *STS* (Sala Primera), de 16 de diciembre nº 710/2015 interpreta el artículo 19 del Reglamento Bruselas II *bis*, como el competente para regular la litispendencia y sus consecuencias para la presentación de demandas de divorcio y separación judicial ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros. Para ello, establece que el órgano jurisdiccional ante el que se presente la segunda demanda debe suspender de oficio el procedimiento si no se ha establecido la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.⁹⁸

En atención a lo anteriormente, tanto los profesores Caravaca y Carrascosa⁹⁹, como la Comisión en su “Guía práctica”¹⁰⁰ determinan, en el caso de demandas de divorcio y separación judicial instituidas ante un órgano jurisdiccional declarado previamente competente, que automáticamente los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros dejan de ser competentes y deben desestimar toda demanda sucesiva.

Realmente el artículo 19 del Reglamento resguarda dos situaciones¹⁰¹:

- a. cuando la presentación de demandas se produce entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, que el tribunal ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento mientras el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda no se declare competente.¹⁰²
- b. Por otra parte, existe la posibilidad de presentar demandas que no tienen el “mismo objeto” ni la “misma causa”, sino que se consideran

⁹⁷ *Vid.* fallo de la STJUE, 6 de octubre de 2015.

⁹⁸ *STS*, de 16 de diciembre nº 710/2015.

⁹⁹ *Cf.*, A. L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González, “*Derecho Internacional Privado Vol. II*” ..., *opus cit.*, pág. 134.

¹⁰⁰ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pág. 15.

¹⁰¹ P. Orejudo Prieto de los Mozos, “Diez años” ..., *opus cit.*, §§ 26- 28, también trata la problemática de litispendencia y acciones conexas de los procedimientos de divorcio y separación judicial.

¹⁰² Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pág. 15. también P. Orejudo Prieto de los Mozos, “Diez años” ..., *opus cit.*, § 27.

“acciones dependientes” o “falsa litispendencia”, ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros.¹⁰³

Además, en palabras de la Prof. Orejudo Prieto de los Mozos “*la literalidad de este precepto no permitiría aplicar la norma sobre litispendencia y acciones dependientes cuando las partes en los procedimientos abiertos en los diferentes EEMM (Estados Miembros) no coincidan, aunque se refieran al mismo matrimonio, que es lo que hace que surja el riesgo de relaciones claudicantes.*”¹⁰⁴ Por esta razón la Prof. Orejudo Prieto de los Mozos anima a modificar el precepto, para que el procedimiento que determina en los citados supuestos, debería proceder a “*las acciones presentadas en Estados Miembros diferentes se refieran al mismo matrimonio, con independencia de quiénes sean partes que solicitan su relajación o disolución.*”¹⁰⁵

En definitiva, tal como se recoge en numerosa jurisprudencia (SAP de A Coruña de 23 de noviembre de 2016 nº 697/2016; STS de 16 de diciembre de 2015 nº 5223/2015 en relación con STS de 16 diciembre nº 710/2015 y SAP de Girona de 20 de diciembre de 2017 nº 1492/2017, entre otras) cuando con arreglo al artículo 3 del presente Reglamento, se presenta una demanda ante un órgano jurisdiccional que se ha declarado competente, los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros dejan de ser competentes y deben desestimar toda demanda subsiguiente. Además, el propósito de la norma de litispendencia es garantizar la seguridad jurídica y evitar acciones paralelas como posibles resoluciones incompatibles.

En cuanto al apartado de reconocimiento de resoluciones de divorcio, y separación legal susceptibles de ser reconocidas por el Reglamento Bruselas II *bis*, a continuación, haremos un estudio del Sistema previsto en el propio Reglamento, dejando en el siguiente apartado, los efectos en España de las sentencias extranjeras y divorcio.

La Comisión Europea¹⁰⁶, también expone una serie de aclaraciones en cuanto al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, por consiguiente, es interesante recordar el cuadro explicativo

¹⁰³ Cf., A. L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González, “*Derecho Internacional Privado Vol. II*” ..., *opus cit.*, pág. 134.

¹⁰⁴ P. Orejudo Prieto de los Mozos, “Diez años” ..., *opus cit.*, § 27.

¹⁰⁵ *Ibidem.*

¹⁰⁶ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pp. 5-6.

realizado sobre normas transitorias, con el fin de ayudar a la interpretación del Reglamento.

Concretamente se analiza el artículo 64 del Reglamento aclarando lo siguiente:

Las normas relativas al reconocimiento y la ejecución del Reglamento se aplican, en relación con las acciones judiciales ejercitadas antes del 1 de marzo de 2005, a tres categorías de resoluciones:

(a) las resoluciones judiciales dictadas el 1 de marzo de 2005 y con posterioridad a esa fecha como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha, pero después de la entrada en vigor del Reglamento Bruselas II (apartado 2 del artículo 64);

(b) las resoluciones judiciales dictadas antes del 1 de marzo de 2005 como consecuencia de acciones ejercitadas con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento Bruselas II en asuntos que forman parte de su ámbito de aplicación (apartado 3 del artículo 64),

(c) las resoluciones judiciales dictadas antes del 1 de marzo de 2005, pero después de la fecha de la entrada en vigor del Reglamento Bruselas II como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicho Reglamento (apartado 4 del artículo 64).¹⁰⁷

También, A.P., Abarca Junco¹⁰⁸ se pronuncia sobre las resoluciones de divorcio, separación susceptibles de ser reconocidas mediante el Reglamento Bruselas II *bis*, aclarando que “*por resoluciones, a efectos del Reglamento, se entiende cualquier decisión de divorcio, separación [...] de los cónyuges, dictada a raíz de tales acciones en materia matrimonial,- cualquiera que sea su denominación, ya sea sentencia, resolución o auto-, y proveniente de un órgano jurisdiccional, entendiéndose por tal cualquier Autoridad de un Estado miembro competente en la materia*”.

En cuanto al origen de la decisión, son dos las condiciones de aplicación del sistema de Reconocimiento del Reglamento: primera, que la resolución emane de un Estado miembro, segunda, que la Autoridad que la dictó sea competente en ese Estado¹⁰⁹.

Con respecto al contenido de la decisión, en relación con la separación legal, el divorcio, sólo se incluye en el Reglamento el efecto principal, es decir, la modificación del vínculo, por lo que no se aplica su sistema de reconocimiento a ninguno de los efectos de estas resoluciones. Asimismo, a efectos de Reglamento, por resolución se entiende únicamente, las positivas de declaración de divorcio y

¹⁰⁷ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pp. 5-6.

¹⁰⁸ A.P., Abarca Junco (Dir.), “*Derecho Internacional Privado Vol. I*” ..., *opus cit.*, pp. 538-539.

¹⁰⁹ A.P., Abarca Junco (Dir.), “*Derecho Internacional Vol. II*” ..., *opus cit.*, pp. 161-162.

separación. Por tanto, no lo son las resoluciones denegatorias a las que en ningún caso le serán de aplicación las normas sobre reconocimiento del Reglamento¹¹⁰.

Reglamento Bruselas II *bis*, como objetivo principal busca facilitar el reconocimiento de resoluciones en materia matrimonial. Dicho lo cual, la primera idea para tener en cuenta es que toda resolución dictada en un Estado miembro será reconocida en los demás Estados miembros, es decir, en principio no es necesaria la aplicación de procedimientos especiales para el efectivo reconocimiento de las resoluciones judiciales en un Estado miembro de la Unión Europea que ha sido dictada por otro Estado miembro¹¹¹. La Comisión, en atención al 21 del Reglamento Bruselas II *bis*¹¹² manifiesta que si no se llevan a cabo recurso o no es posible presentar más recursos contra la resolución judicial en el Estado miembro donde ha sido dictada, no se solicitará ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro con respecto a la base de una resolución¹¹³.

Entonces podemos exponer que el Reglamento Bruselas II *bis*, prevé dos tipos de reconocimiento:

a) el primero, mediante la posibilidad de acudir a un reconocimiento automático, es decir, sin necesidad de procedimiento alguno previamente mencionado,

b) el segundo, cuando en sus limitadas motivaciones, el Reglamento Bruselas II *bis* rechaza el reconocimiento de una resolución. En ese caso, se acude a un procedimiento especial para dicho reconocimiento¹¹⁴.

En su “Guía Práctica”¹¹⁵, la Comisión evalúa el procedimiento de reconocimiento y ejecución, basándose en los artículos 21 y 23 a 39 del presente Reglamento.

Por consiguiente, el Reglamento Bruselas II *bis* otorga la posibilidad a las partes interesadas de pedir una resolución de separación judicial o divorcio, según se trate, que haya sido dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, de ser reconocida o no y a declararse la ejecutoriedad de dicha decisión.

¹¹⁰ A.P., Abarca Junco (Dir.), “*Derecho Internacional Vol. II*” ..., *opus cit.*, pp. 161-162.

¹¹¹ *Ibidem*, pág. 162, también J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones sobre el Derecho internacional privado español*, Liceus Derecho Internacional, 2014, pág. 127.

¹¹² *Vid.* R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

¹¹³ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pág. 15.

¹¹⁴ *Cf.* A.P., Abarca Junco (Dir.), “*Derecho Internacional Vol. II*” ..., *opus cit.*, pág. 162.

¹¹⁵ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., *opus cit.*, pág. 15.

Seguidamente se lleva a cabo un proceso donde se declarará la ejecutoriedad de la resolución judicial extranjera, llamado también, exequátur. Para ello se solicitará ante un órgano jurisdiccional competente en el Estado miembro en que se busca el reconocimiento y la ejecución¹¹⁶, para que dicho órgano, sin más dilaciones, declare la ejecutoriedad de dicha resolución. Se tendrá que adjuntar copia de la sentencia y un certificado del órgano emisor establecido al formulario que establece el anexo I del citado Reglamento¹¹⁷. La persona frente a la que se solicita el reconocimiento o la ejecución no puede presentar alegaciones al órgano jurisdiccional. No obstante, las partes podrán recurrir la resolución ante uno de los órganos jurisdiccionales¹¹⁸ designados a este fin por los Estados miembros, entendiéndose que ambas partes puede presentar alegaciones al órgano jurisdiccional.

Ulteriormente la solicitud de reconocimiento o no reconocimiento de la resolución de que se trate puede denegarse (artículo 22 del presente Reglamento) si la resolución es manifiestamente contraria al orden público, dictada en rebeldía del demandado (cuando no se le ha notificado o trasladado de forma que pueda organizar su defensa, salvo que se sepa a ciencia cierta de la aceptación de la resolución), inconciliable con otra dictada entre las mismas partes en el estado miembro requerido, o sea inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado entre las mismas partes y la primera resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro solicitado¹¹⁹.

A continuación, la Comisión determina una serie de prohibiciones al órgano jurisdiccional requerido, en las cuales no puede: “*controlar la base de la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen que dictó*

¹¹⁶ R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, en su artículo 21. 3 párrafo segundo del Reglamento Bruselas II *bis* estipula: “*La competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68 se determinará en virtud del Derecho interno del Estado miembro en el que se inicie el procedimiento de reconocimiento o no reconocimiento*”. Además, J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 127, basándose en la redacción del mencionado artículo 21.3, enuncia que, en el caso de nuestro Estado miembro, “*se solicitará al Juzgado de Primera Instancia del lugar de la residencia habitual de la parte requerida que proceda a reconocer, a no reconocer o a declarar la ejecutoriedad de dicha decisión*.”

¹¹⁷ *Vid.*, Anexo I del R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:ES:PDF>.

¹¹⁸ J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 127, “*Contra la resolución podrá recurrirse ante la Audiencia Provincial en el plazo de un mes, en un procedimiento contradictorio y contra el pronunciamiento de Ésta cabe la casación*”.

¹¹⁹ *Cf.* Comisión Europea, “*Guía Práctica*” ..., *opus cit.*, pág. 16; También A.P., Abarca Junco (Dir.), “*Derecho Internacional Privado Vol. II*” ..., *opus cit.*, pág. 164.

la resolución¹²⁰, aplicar el criterio de orden público a las normas de competencia establecidas en los artículos 3 a 7 del presente Reglamento¹²¹, negarse a reconocer la resolución alegando que el Derecho del Estado miembro no habría autorizado una resolución en materia matrimonial basándose en los mismos hechos¹²², ni [...] revisar el fondo de la resolución¹²³”.

Por último, la Comisión hace referencia al concepto de documento público¹²⁴, entendiendo como tal al “documento con fuerza ejecutiva formalizado o registrado en un Estado miembro y los acuerdos entre las partes con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen que se han de reconocer y dotar de fuerza ejecutiva en las mismas condiciones que las resoluciones judiciales”.¹²⁵

También añade conforme al artículo 52 del citado Reglamento, la no exigencia de formalidades de legalización de los documentos relacionados con el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, incluidos las resoluciones y los certificados¹²⁶.

En la misma línea, la AAP de Barcelona de 12 de noviembre de 2018 nº 6904/2018 FJ Tercero ha resuelto “las reglas que rigen el foro competencial en materia civil, tanto Hispano Marroquí de 30.5.1997, el artículo 22 quater [...] como el Reglamento Bruselas II bis de la CE, no establecen reglas de competencia en relación con el divorcio de forma excluyente, sino que desarrollan un abanico de opciones que pueden servir de anclaje competencial. Entre ellos está el criterio de nacionalidad común de los litigantes.”.

A) Estudio comparativo de los textos del Artículo 22 de la Ley orgánica del Poder Judicial y Artículos 3, 4 y 5 del Reglamento (CE) 2201/2003.

Como ya sabemos, nuestro sistema posee un modelo de competencia asentado sobre dos pilares: el que proviene del Derecho internacional privado

¹²⁰ Vid., artículo 24 del R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

¹²¹ Ibidem.

¹²² Vid., artículo 25 R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

¹²³ Vid., artículo 26 R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

¹²⁴ Vid., artículo 46 R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003.

¹²⁵ Comisión Europea, “Guía Práctica” ..., opus cit., pág. 16.

¹²⁶ Ibidem.

autónomo¹²⁷ regulado en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial¹²⁸ y el de origen institucional regulado concretamente por los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento¹²⁹ Bruselas II *bis*.¹³⁰

El primer sistema posee un carácter meramente residual, y resulta aplicable a las escasas materias no cubiertas por el Reglamento¹³¹. El Régimen institucional actúa con carácter exclusivo en relación con los demandados que sean nacionales o residentes habituales de un país miembro¹³².

Así pues, en los supuestos no regulados por tales Tratados y otras normas internacionales, la competencia vendrá determinada por la concurrencia de los foros de competencia internacional recogidos en la LOPJ. De igual forma, el artículo 9.1 de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria¹³³ respecto de la competencia internacional, dispone lo siguiente:

“Los órganos judiciales españoles serán competentes para conocer los expedientes de jurisdicción voluntaria suscitados en los casos internacionales, cuando concurran los foros de competencia internacional recogidos en los Tratados y otras normas internacionales en vigor para España.

En los supuestos no regulados por tales Tratados y otras normas internacionales, la competencia vendrá determinada por la concurrencia de los foros de competencia internacional recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.”

Con relación al artículo 9. 1 de la Ley 15/2015, en palabras del Prof. Espinar “*Nuestro Ordenamiento confía la organización del paradigma conyugal a los esposos y esboza un perfil difuso de derechos y deberes. La Ley de*

¹²⁷ J.C., Fernández Rozas y S., Sánchez Lorenzo, *Derecho Internacional ...*, opus cit., pág. 451, manifiesta que las normas de competencia judicial internacional del derecho autónomo, es decir, las del artículo 22 de la LOPJ, sólo resultan de aplicación, además de su aplicación transitoria, cuando el cónyuge solicitado precisa de residencia habitual y de nacionalidad de un Estado miembro.

¹²⁸ Cf. Artículo 22 LOPJ.

¹²⁹ Vid. nota 54.

¹³⁰ J.M., Espinar Vicente, *Tratado elemental de derecho internacional privado*, Madrid, Universidad de Alcalá 2008, pág. 540.

¹³¹ A. L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado Vol. II ...*, opus cit., pág. 138 también dispone que los foros de competencia de la LOPJ, concretamente de su artículo 22, sólo serán de aplicación cuando según el artículo 7. 1 del R (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003: ningún tribunal de un Estado miembro sea competente para conocer de la acción de divorcio o separación judicial.

¹³² J.M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 118.

¹³³ Vid. artículo 9.1 de la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria.

Jurisdicción Voluntaria consagra su artículo 90¹³⁴ a la intervención judicial y la limita a los casos de desacuerdo conyugal sobre la fijación del domicilio [...].”¹³⁵

Por lo que, deberá procederse a determinar la competencia de nuestros tribunales conforme a las solicitudes que puedan promoverse con base al referido articulado de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.¹³⁶

Teniendo en cuenta el estudio del Prof. Espinar¹³⁷ comparando los dos textos legales en la siguiente tabla, podemos observar las principales diferencias entre ambos textos:

Artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder judicial	Artículo 3 del reglamento (CE) 2201/2003
2. Con carácter general, [...] cuando el demandado tenga su domicilio en España	Son competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:
3. En defecto de los criterios precedentes y en materia [...] de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, [...] separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad, cualquiera que sea el lugar de su residencia, siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o con el consentimiento del otro ¹³⁸ .	<p>a) en cuyo territorio se encuentre:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La residencia habitual de los cónyuges, o -El último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos resida aún allí, o -La residencia habitual del demandado, o -en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o -La residencia habitual del demandante si ha residido allí durante un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o -La residencia habitual del demandante en caso de que haya residido al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su <i>domicile</i>; <p>b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso de Reino Unido y de Irlanda. Del <i>domicile</i> común.</p>

¹³⁴ Vid. artículo 90 de la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria.

¹³⁵ Cf., J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica..., opus cit.*, pp. 170 y 171.

¹³⁶ *Ibidem*, pág. 172.

¹³⁷ J.M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 118.

¹³⁸ J.C., Fernández Rozas y S., Sánchez Lorenzo, *Derecho Internacional ..., opus cit.*, pág. 451, disponen: “en España, sería factible fundar la competencia en el foro de la nacionalidad y residencia del demandante en España, y, si se admite su dudoso juego, en el foro de la sumisión expresa. El foro de la sumisión expresa ha sido como una opción plausible por parte de la doctrina y de la jurisprudencia.”

A continuación, el Prof. Espinar¹³⁹, sitúa en relación las disposiciones procedentes de ambas fuentes para así, evaluar las diferencias que se producen entre ambas regulaciones:

a) El foro del domicilio demandado

La diferencia entre el domicilio del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la residencia habitual del artículo 3 del Reglamento se disgrega en este aspecto.

El artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se refiere a la residencia del demandado¹⁴⁰. Por tanto, el domicilio se corresponderá con la definición del artículo 40 del Código Civil¹⁴¹. Por consiguiente, el concepto de demandado con residencia habitual en España y el de quien tiene su domicilio en nuestro país, se identifican, normalmente, en un solo criterio de atribución de competencia. Se exige que el sujeto resida habitualmente en España, no bastando su “mera estancia en España”.¹⁴²

En este sentido, el Prof. Espinar opina que, el foro de residencia habitual del demandado carece de sentido en nuestro ordenamiento pues, en el ámbito de la jurisdicción voluntaria no se produce esta posición procesal. Además, como se explicará más adelante, el foro de la nacionalidad del solicitante cuando lleve al menos seis meses de residencia habitual en España sólo tendría una utilidad muy limitada y el resto de los foros carecen de relevancia para estos supuestos.¹⁴³ Es más, el Prof. Espinar plantea la siguiente posibilidad:

[...] “haber dotado de unas normas de competencia judicial internacional propias a las cuestiones recogidas en el artículo 90 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, distintas y diferenciales a las de la quiebra de la relación matrimonial. Y es que este tipo de solicitudes se inscriben en el ámbito de un desacuerdo en el que no se contesta la continuidad de la relación conyugal. En este escenario, las peticiones de intervención judicial tienen un objetivo radicalmente contrapuesto al

¹³⁹ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 119; *Tratado elemental* pp. 541-543.

¹⁴⁰ Vid. artículo 769 LEC.

¹⁴¹ El artículo 40 del Código Civil, respecto al domicilio, dispone: “Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

¹⁴² También A., Ortega Giménez, “Crisis matrimoniales: Competencia judicial internacional y determinación de la Ley aplicable en casos de nulidad matrimonial, separación de hecho, separación judicial y divorcio”, *Revista de Derecho vLex*, Núm. 97, febrero 2012, menciona que el *Domicilio equivale a residencia habitual*, puesto que en Derecho privado español ambos conceptos coinciden. Por esta razón, no hace falta estar inscrito en *Registros públicos o Padrón Municipal*, sino que sería suficiente que el demandado viva o resida habitualmente en España.

¹⁴³ Cf., J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica...*, opus cit., pp. 172 y 173.

que sustentan las demandas cuya finalidad es la interrupción o disolución legal de la relación jurídica matrimonial. Aplicar el mismo criterio para determinar la competencia judicial internacional en ambos supuestos no casa bien con la heterogeneidad que manifiestan sus respectivas naturalezas. Por eso, a nuestro juicio, lo más coherente hubiese sido atribuir a la jurisdicción española el conocimiento de estas solicitudes cuando el matrimonio residiese en España o hubiera tenido su última residencia en nuestro país y el solicitante la conservara aún; o cuando la solicitud se refiriese a actos de disposición o administración sobre bienes situados en España”.¹⁴⁴

b) El foro de la residencia del demandante

Aquí se produce una diferencia sustancial. En nuestro sistema autónomo se exige la nacionalidad en todo caso. En cambio, el Reglamento extiende el foro a los residentes con más de un año de estancia en el país y rebaja a seis meses el mínimo de residencia habitual para los naturales. Ésta última condición no aparece en nuestra norma interna, pero entendemos que las discrepancias entre una y otra son mínimas y se reducen a una calificación de la residencia habitual, más objetivada en la redacción del Reglamento.¹⁴⁵

c) El foro de la residencia habitual

La primera de las conexiones retenidas en el texto institucional coincide con la de nuestro Derecho autónomo. La segunda tiene poca trascendencia práctica, ya que constituye una mínima aportación más bien, testimonial, de un foro que poco añade a los demás. En efecto, la última “*residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aun resida allí*” se podría traducir en el foro de la residencia habitual del demandante o en la del demandado. Pues bien, si atendemos al eventual demandado, resulta obvio que no hace falta que tuviera establecida allí su residencia conyugal para que resulten competentes los tribunales de aquel país. Si nos fijamos en el demandante, el único matiza que se añadiría con esta disposición sería el de enervar el requisito de una estancia superior a seis meses o un año en aquel lugar y conmutarla por otro índice de arraigo. Con esto no se niega la operatividad del foro ni su racionalidad, puesto que la existencia de un domicilio conyugal previo constituye un índice de

¹⁴⁴ Cf., J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica...*, opus cit., pág. 173.

¹⁴⁵ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 119; *Tratado elemental* págs. 541-543.

enraizamiento importante y facilita la prueba de conexión, sino que nos limitamos a señalar que su juego, en la práctica, tiende a ser complementario.¹⁴⁶

En este sentido, la AAP de Tarragona de 18 de mayo de 2018 n° 515/2018¹⁴⁷ dispone que,

“el quinto foro anunciado en el artículo 3.1 a) del Reglamento 2201/2003, prevé como criterio objetivo para la atribución de la competencia “la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda”. Por lo que, resulta indiferente cuál sea la nacionalidad del demandante, siempre que éste reúna el correspondiente requisito de vínculo real, objetivo, serio y efectivo con el territorio del Estado miembro, vínculo que en este caso está basado en a la residencia habitual del demandante.”

d) El foro de la nacionalidad común

En este caso, la norma europea amplía el espectro de la española. El foro de la nacionalidad común sin residencia limita a la posibilidad de obtener un divorcio distinto al consensual. Si el cónyuge requerido no acepta el convenio regulador propuesto por el requirente o no se ratifica en el que hubieren pactado¹⁴⁸ ambos, los tribunales españoles carecerían de jurisdicción internacional para sustanciar el divorcio. La disposición del Reglamento nos parece más coherente al abrir a los nacionales todas las vías previstas para la resolución de las crisis matrimoniales en el sistema de su ciudadanía, residan donde residan.¹⁴⁹

Como puede verse existen diferencias entre el texto reglamentario operativo y el residual de fuente interna; si bien tales diferencias no resultan radicales ni contradictorias. Algunas de las conexiones son coincidentes, otras introducen matices que facilitan su aplicación y las demás abren la competencia de nuestra jurisdicción a supuestos claramente racionales¹⁵⁰.

e) La elección del foro en las causas de separación y divorcio

La primera nota de nuestro régimen de separación y divorcio se caracteriza por la “*voluntad inequívoca*” de uno de los cónyuges; por lo tanto, una vez

¹⁴⁶ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 120 y *Tratado elemental*, pág. 543.

¹⁴⁷ Vid. AAP de Tarragona de 18 de mayo de 2018 n° 515/2018 FD Segundo §7.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 120 y *Tratado elemental*, pág. 543.

¹⁵⁰ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 120 y *Tratado elemental*, pág. 543.

manifestada no se precisa practicar ninguna prueba. De ahí que los artículos 81 y 86 del Código Civil establezcan que: “*A la demanda se acompañará la propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación*”.¹⁵¹

Por tanto, podríamos afirmar que las consecuencias derivadas de las crisis matrimoniales se dejan en manos de los propios esposos, quienes propondrán al Juez un acuerdo regulador que será aprobado si el magistrado estima que quedan suficientemente protegidos los derechos de los hijos y no resulta gravemente perjudicial para uno de los cónyuges y culmina con su aprobación (procedimiento previsto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), o, por el contrario, deciden seguir el procedimiento establecido en su articulado 770 donde cabe la contienda, pero solo a los efectos derivados de la suspensión o disolución vincular. Dicho lo cual, el divorcio constituye un acto de jurisdicción voluntaria, cuya tramitación puede derivar en un procedimiento contencioso que se caracteriza precisamente por versar sobre un objeto distinto al de la esencia de la suspensión o disolución del vínculo; por tratarse éste de un derecho no susceptible de ser discutido en juicio.¹⁵²

Respecto a la elección del foro en las causas de separación y divorcio, nuevamente, el Prof. Espinar¹⁵³ nos muestra su estudio acerca de la sumisión en las causas de separación y divorcio y de la naturaleza de estos institutos, al que me voy a referir a continuación.

El sistema institucional permite escoger entre el foro de la residencia habitual común o el de la de un solo cónyuge, (en las circunstancias descritas) o la jurisdicción correspondiente a la nacionalidad común de los esposos y con ellos limita toda otra posibilidad de opción. En nuestra legislación, el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil utiliza un expediente similar para los supuestos de tráfico interno, sin embargo, nuestra normativa autónoma no sigue ese criterio cuando regula la competencia internacional. Por el contrario, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial advierte en su numeral tercero que los foros de

¹⁵¹ Cf., J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica..., opus cit.*, pág. 186.

¹⁵² Cf., J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica..., opus cit.*, pp. 187 y 188.

¹⁵³ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, págs. 120-122 y *Tratado elemental*, pp. 543-547.

competencia que incluyen operan “*en defecto de los criterios precedentes*”; y, entre ellos, se encuentra la sumisión.¹⁵⁴

Sin embargo, quien solicita el divorcio no apoya su pretensión en ningún motivo concreto y, por lo tanto, la otra parte no dispone de mecanismos que le permitan oponerse al ejercicio de esta prerrogativa individual. Si no hay oposición no hay partes; y si no hay partes no cabe la sumisión. Como hemos mencionado con anterioridad, el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento, regula un procedimiento típico de la jurisdicción voluntaria. Los cónyuges presentan un convenio regulador de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro. Sobre esta base el Juez consagrará el derecho inalienable del solicitante o solicitantes a la disolución del vínculo y recubrirá el acuerdo de las partes con la garantía de su aprobación. Ahora bien, si esta solicitud no fuese ratificada por alguno de los cónyuges “... *se acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, sin ulterior recurso, quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el artículo 770.*”¹⁵⁵

En el procedimiento previsto en dicho artículo, frente a la solicitud de divorcio *propio sensu*, cabe la “reconvención” para instar la nulidad de divorcio o el divorcio frente a la separación; pero la contienda se concreta exclusivamente en los términos del convenio regulador. Así pues, la calidad del “demandado” de uno de los cónyuges sólo puede predicarse en relación con su oposición a las medidas propuestas por el otro para regular los efectos de la separación o el divorcio. Hay que tener en cuenta, además, que ambos procedimientos son permeables. Se puede compensar por la vía del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, a falta de acuerdo, promover la pretensión por el cauce del 770 de la citada Ley. Se puede estar sustanciando el juicio al amparo del artículo 770 y continuar el proceso por los trámites previstos en el artículo 777 si se cumpliesen los requisitos consensuales previstos en dicha disposición.¹⁵⁶

Nuestro Ordenamiento entiende que el divorcio es un derecho que no puede negarse a quien lo solicita y que, por tanto, no cabe oposición a esa pretensión. Sin embargo, considera que un planteamiento contencioso en relación

¹⁵⁴ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 120 y *Tratado elemental*, pág. 543.

¹⁵⁵ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, págs. 120-122 y *Tratado elemental*, págs. 543-547.

¹⁵⁶ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 121.

con los efectos derivados del nuevo estado civil constituye una consecuencia que es necesario prever, aunque sería conveniente eludir. Desde esta óptica, el divorcio constituye un acto de jurisdicción voluntaria, cuya tramitación puede dar lugar a un eventual procedimiento contencioso caracterizado por versar sobre un objeto distinto al de la disolución del vínculo.¹⁵⁷

Por tanto, puede entenderse que la norma de competencia judicial internacional contenida en el numeral tercero del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se refiere al divorcio en cuanto “disolución del vínculo”. En este caso, se trataría de un precepto relativo a un acto de jurisdicción voluntaria, que sería independiente de los foros generales que sólo atiende a los supuestos contenciosos. Cuando se produce oposición a un problema conexo a la disolución del vínculo (los efectos del divorcio) los tribunales españoles asumirían la competencia por conexión para ventilar el problema por los cauces de tan citado artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, a nuestro juicio, no cabe la sumisión en esta materia.¹⁵⁸

En conclusión, podríamos resumir las únicas diferencias entre los textos del Artículo 22 de la Ley orgánica del Poder Judicial y Artículos 3, 4 y 5 del Reglamento (CE) 2201/2003 en las siguientes¹⁵⁹:

- a) el supuesto de hecho de la norma española es más amplio, puesto que incluye las “*relaciones personales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio*”;
- b) la segunda se trata de un error de transcripción, puesto que confiere competencia a nuestros órganos jurisdiccionales cuando el demandante “*lleve al menos un año de residencia habitual en España desde la interposición de la demanda*”;
- c) la última es la condiciona la aplicación del conjunto a “*que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia*”.

Hacemos nuestras las palabras de Prof. Espinar “*la explicación de esta última divergencia es relativamente sencilla aunque no muy convincente como técnica legislativa*” cuando analiza el poco margen que el Reglamento Bruselas

¹⁵⁷ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pp. 121-122.

¹⁵⁸ Cf., J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones*, pág. 122.

¹⁵⁹ Cf., J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica...*, opus cit., pág. 191.

II *bis* deja a nuestros órganos jurisdiccionales en materia de competencia judicial internacional.

En este sentido, el Prof. Espinar comenta que, si se utilizan las mismas vinculaciones que las empleadas en el Reglamento para atribuir competencia a nuestros jueces y tribunales, el resultado es que cada vez que los órganos jurisdiccionales españoles asuman competencia, lo harán tanto con base en el artículo 22 *quáter*, como en aplicación del artículo 3 del Reglamento Bruselas II *bis*.¹⁶⁰

Como ya hemos analizado al principio de este apartado anterior, es evidente el carácter exclusivo de los foros regulados en el artículo 6 del Reglamento Bruselas II *bis*, a saber, siempre que el cónyuge demandado tenga su residencia habitual en un Estado miembro o posea su nacionalidad. Por esta razón, tratándose de un foro de esta naturaleza, determinado por una norma de la Unión Europea, el Juez deberá abstenerse de oficio cuando la jurisdicción de otro Estado miembro posea tal carácter.¹⁶¹

En opinión del Prof. Espinar, “*esta precaución, tal como viene formulada, resulta inoportuna;*” de hecho, si el demandado resulta domiciliado en un Estado miembro <<*sólo podrá ser requerida ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud del artículo 3,4 y 5*>>; no obstante, si el demandado no tiene su residencia habitual en un Estado miembro ni posee la nacionalidad de uno de ellos, “*no existe tal competencia exclusiva y el residente en un país de la Unión puede ampararse en las normas autónomas del país de residencia para demandar a su cónyuge; y ello con independencia de que algún otro Tribunal extranjero tenga o no competencia.*”¹⁶²

B) Reconocimiento de resoluciones en la separación y divorcio. Los efectos en España de las sentencias extranjeras de separación y divorcio.

Para que una sentencia extranjera de separación y divorcio surta *efectos procesales* en España, es necesario el *reconocimiento*, y para los *efectos*

¹⁶⁰ Cf., J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica...*, *opus cit.*, pág. 191.

¹⁶¹ Cf., J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica...*, *opus cit.*, pp. 191 y 192.

¹⁶² Cf., J.M., Espinar Vicente, *La regulación jurídica...*, *opus cit.*, pág. 192.

ejecutivos, se necesita, el *exequatur*.¹⁶³ En este sentido, la SAP de Girona de 12 de marzo de 2013 nº 260/2006 FJ Segundo dispone que, “*no puede aceptarse la cosa juzgada respecto de una sentencia dictada por un tribunal extranjero, salvo que por los tratados o convenios internacionales tenga eficacia en España, o la tenga en virtud del exequatur regulado en los artículos 951 y siguientes de la L.E.C. Por tanto, mientras no se haya reconocido la eficacia de una sentencia extranjera, no puede alegarse la cosa juzgada.*”

Recordemos que en el apartado anterior¹⁶⁴ hemos analizado como el Reglamento 2201/2003 constituía el régimen de aplicación prioritaria para el reconocimiento de las decisiones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia de divorcio y separación.

En este apartado se examinará el reconocimiento automático del efecto constitutivo de las sentencias de divorcio en nuestro régimen común.

En efecto, es de suma importancia la nueva regulación de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil¹⁶⁵ (Ley 29/2015, en adelante) sobre los efectos de las sentencias extranjeras y documentos públicos que rigen en nuestro país.

La Ley 29/2015 tiene carácter subsidiario, rige para aquellos casos en los que no exista un tratado internacional, norma de la Unión Europea o normativa sectorial específica que resulte de aplicación. Y de esta manera lo especifica su artículo 2:

“la cooperación jurídica internacional en materia civil [...] se rige por (a) las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte, (b) las normas especiales de Derecho interno y (c), subsidiariamente, por la Ley de Cooperación Jurídica Internacional.”

En este marco las cuestiones principales reguladas por la Ley son¹⁶⁶:

¹⁶³ Cf., A. L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado Vol. II* ..., *opus cit.*, pág. 155.

¹⁶⁴ *Vid.* págs. 27-31 del presente trabajo, relativas al apartado de reconocimiento de resoluciones de divorcio, y separación legal susceptibles de ser reconocidas por el Reglamento Bruselas II *bis*.

¹⁶⁵ España. Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, *Boletín Oficial del Estado*, de 31 de julio de 2015, núm. 182, páginas 65906 a 65942 (37 págs.)

¹⁶⁶ Cf. E., Trigo Sierra y M.ª E., Pérez-Pujazón. “Las Reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2015”, *Actualidad jurídica Uría Menéndez*, Núm. 42, 2016, pág. 40.

-El reconocimiento y ejecución de resoluciones y documentos públicos extranjeros, con la consiguiente derogación de los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que regulaban la eficacia en España de las resoluciones dictadas en el extranjero.

-Se establecen de manera expresa las resoluciones susceptibles de reconocimiento y ejecución, y de forma habitual, se mantiene el requisito de firmeza para poder llevarlo a cabo. La nueva normativa nos permite reconocer y ejecutar las resoluciones referentes a medidas cautelares o provisionales cuando la denegación del reconocimiento es producto de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de haber sido adoptadas con audiencia de la parte contraria.¹⁶⁷

-En cuanto al reconocimiento, desaparece el requisito de reciprocidad y la regulación del reconocimiento incidental en el ámbito de un concreto procedimiento judicial cuando es necesario que la resolución extranjera cause efectos. Esto es, se deberá acudir al *exequatur* como procedimiento específico: declaración de reconocimiento de una resolución extranjera y autorizar su ejecución en España.¹⁶⁸

En este sentido, SAP de Córdoba de 6 de marzo de 2018 n° 590/2018 FJ Primero denegó la inscripción de un nuevo matrimonio por no mediar efectivo consentimiento matrimonial, en cuanto que el contrayente, nacional español aparece como divorciado en virtud de tribunal colombiano por no contar con el oportuno *exequatur*. Es menester el *exequatur* para que la sentencia de divorcio del recurrente tenga efectos en España. Además, según RDGRN de 30 de junio de 2009 “*sin homologación judicial de la sentencia de divorcio extranjera para el ordenamiento español subsiste el primer matrimonio de interesado y queda impedida la celebración del matrimonio posterior, nulo para el Derecho español por existir, al menos formalmente, impedimento de ligamen*”.¹⁶⁹

-Y por último, en lo que concierne a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 29/2015 ha introducido una regulación específica para la aplicación de las normas sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, concretamente en su disposición final vigesimoquinta, haciendo referencia al Reglamento (UE) 1015/2015 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a

¹⁶⁷ Cf. E., Trigo Sierra y M.ª E., Pérez-Pujazón. “Las Reformas” ..., *loc. cit.*, pág.40.

¹⁶⁸ *Ibidem*, pp. 40-41.

¹⁶⁹ Cf., SAP de Córdoba de 6 de marzo de 2018 n° 590/2018 FJ2.

la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia Civil y Mercantil.¹⁷⁰

2.2 Análisis de la Aplicación Reglamento 2016/1103 (UE) de 24 de junio de 2016¹⁷¹.

A) Aspectos generales.

En este apartado vamos a analizar el presente el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo de 24 de junio de 2016 por el que se establece una cooperación reforzada¹⁷² en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y poder asentar los principales objetivos y novedades que presentan al respecto¹⁷³.

Así como introduce el Consejo de la Unión Europea, “*Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 81, apartado 3*”¹⁷⁴, la base jurídica del presente Reglamento ha sido el artículo 81.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Reglamento (UE) 2016/1103 presenta como principal objetivo, sustentar e impulsar un espacio de libertad, seguridad y justicia para garantizar la libre circulación de las personas. Para cumplir con ese objetivo, la Unión Europea debe adoptar una serie de mecanismos en el ámbito de cooperación judicial en asuntos civiles con proyección “*transfronteriza*”¹⁷⁵, para conseguir el buen

¹⁷⁰ Cf. E., Trigo Sierra y M.^a E., Pérez-Pujazón. “Las Reformas” ..., *loc. cit.*, pág. 41.

¹⁷¹ R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

¹⁷² *Vid.*, J. C., Fernández Rozas, “Un hito más en la comunitarización del Derecho internacional privado: regímenes económicos matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas”, en *La Ley Unión Europea*, N.º 40, 30 de septiembre de 2016, págs. 8-9, Capítulo II. Apartado tercero para entender el recurso a la cooperación reforzada.

¹⁷³ Diario la Ley. “Comentario al Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo de 24 de junio de 2016 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales”, en *Diariolaley*.

¹⁷⁴ *Vid.*, Artículo 81.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DOUE» núm. 83, de 30 de marzo de 2010, Ref. DOUE-Z-2010-70006, págs. 47 a 199.

¹⁷⁵ *Vid.* P., Peiteado Mariscal, “Competencia internacional por conexión en materia de régimen económico matrimonial y de efectos patrimoniales de uniones registradas. Relación entre los reglamentos UE 2201/2003, 650/2012, 1103/2016 y 1104/2016”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, págs. 302-304. Se cuestiona la importancia del carácter transfronterizo del litigio como presupuesto de aplicación de los Reglamentos. [...] *Delimitar con precisión el ámbito de aplicación de estos Reglamentos no se logra, sin embargo, apuntando simplemente la exigencia de una repercusión transfronteriza, de que el litigio afecte a Estados distintos, sino que requiere determinar en qué consisten esta “afección”, o esta “repercusión”. Dicho de otro modo, ¿qué grado de internacionalización debe tener un asunto para que se considere “transfronterizo”? [...] la respuesta a esta cuestión es “cualquiera”. Y que, precisamente por esta amplitud e*

funcionamiento del mercado interior. Por el modo en que se desprende del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, “*estos mecanismos pueden ir orientados principalmente, al aseguramiento de la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de competencia*”¹⁷⁶.

A continuación, vamos a detallar las principales novedades introducidas por el Reglamento (UE) 2016/1103.

En cuanto al ámbito material de la norma se pretende:

1. Reunir en el Reglamento (UE) 2016/1103, el conjunto de normas aplicables a los regímenes económicos matrimoniales con la finalidad de proporcionar la seguridad jurídica de las parejas casadas referente a su patrimonio y brindarles cierta previsibilidad.¹⁷⁷

2. El Reglamento (UE) 2016/1103 congrega disposiciones en materia de competencia, ley aplicable y reconocimiento, o más bien, aceptación, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones, documentos públicos y transacciones judiciales e incluye todos los aspectos de Derecho civil de los regímenes económicos matrimoniales, relacionados tanto con la administración cotidiana del patrimonio matrimonial como la liquidación del régimen, en particular como consecuencia de la separación de la pareja.¹⁷⁸

3. El Reglamento no define el concepto de “matrimonio”¹⁷⁹, definición que compete al Derecho nacional de los Estados miembros, en cambio sí define el concepto de “régimen económico matrimonial”¹⁸⁰ el cual se entenderá de forma autónoma y habrá de contener tanto normas imperativas para los cónyuges como normas opcionales para acordar de conformidad con el Derecho aplicable.

indeterminación, el legislador (del Reglamento (UE) 2016/1103) no define “transfronterizo” ni incluye la exigencia en el articulado, sino que se limita a apuntarla entre los fundamentos de la norma. [...] Los procesos de disolución y liquidación de régimen económico [...] son procesos universales, es decir, procesos que se proyectan sobre un patrimonio completo, y que van a reformular la configuración y la titularidad de ese patrimonio. [...] En este paisaje tan delicado, cualquier elemento de internacionalidad es relevante: no sólo importa si el Estado ante el que se suscita el litigio es o no el del domicilio de las partes, sino que adquieren interés factores como la nacionalidad de las partes, la ley conforme a la que se celebró el matrimonio o se registró la unión, o el lugar de situación de los bienes que configuran el patrimonio que se va a liquidar. De modo que el tribunal ante el que se suscitan cuestiones relativas al régimen económico matrimonial [...] debe aplicar el Reglamento (UE) 2016/1103 si estima que la resolución del asunto puede tener cualquier tipo de repercusión en un Estado distinto, sea éste de la Unión Europea o no.

¹⁷⁶ Diario la Ley. “Comentario al Reglamento” ..., *loc. cit.*

¹⁷⁷ *Ibidem.*

¹⁷⁸ *Ibidem.*

¹⁷⁹ P., Peiteado Mariscal, “Competencia internacional ...” ... *loc. cit.*, pág. 305.

¹⁸⁰ Diario la Ley. “Comentario al Reglamento” ..., *loc. cit.*

4. El presente Reglamento no será aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.¹⁸¹ Además, quedan excluidos de su ámbito de aplicación:

- a) Las materias ya reguladas por Reglamentos de la Unión vigentes, como la obligación de alimentos, especialmente entre los cónyuges, y las cuestiones propias del Derecho de sucesión.
- b) los asuntos referentes a la capacidad jurídica de los cónyuges;
- c) existencia, la validez del matrimonio con arreglo al Derecho nacional y el reconocimiento del matrimonio. Tampoco afecta a las cuestiones relativas a la seguridad social ni al derecho de pensión en caso de divorcio.
- d) Menos aún a la naturaleza de los derechos reales sobre un bien, a la clasificación de los bienes y derechos ni a la determinación de las prerrogativas del titular de tales derechos.¹⁸²

5. Y, por último, con el presente Reglamento se pretende fijar con exactitud cuáles serán las autoridades judiciales¹⁸³ competentes para resolver los conflictos que surjan y a facilitar la circulación de las sentencias y de los documentos públicos. En esencia se pretende que un mismo matrimonio, no pueda ser sometido a un régimen patrimonial diferente en función de la competencia de los tribunales de un determinado Estado o de la legislación nacional que se aplique. Mencionar el carácter abierto que ostenta el matrimonio respecto a la normativa de los Estados participantes a las parejas de sexo opuesto y a las parejas del mismo sexo, con un carácter neutro, no discriminatorio, con respecto al género ni a la orientación sexual¹⁸⁴.

¹⁸¹ Diario la Ley. “Comentario al Reglamento” ..., *loc. cit.*

¹⁸² *Vid.* Artículo 2 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016 relativo al ámbito de aplicación.

¹⁸³ Diario la Ley. “Comentario al Reglamento” ..., *loc. cit.*, se explica el término “*órgano jurisdiccional*” como no solo a los *órganos jurisdiccionales en el sentido estricto de la palabra, que ejercen funciones judiciales, sino también, por ejemplo, a los notarios de algunos Estados miembros que, en determinadas cuestiones del régimen económico matrimonial, ejercen funciones judiciales del mismo modo que los órganos jurisdiccionales, así como los notarios y los profesionales del Derecho que, en algunos Estados miembros, ejercen funciones judiciales en materia de régimen económico matrimonial por delegación de poderes de un órgano jurisdiccional.*

¹⁸⁴ *Vid.* J. C., Fernández Rozas, “Un hito más en la comunitarización” ..., *loc. cit.*, pág. 10, Capítulo III. Apartado primero.

En cuanto al ámbito territorial, Reglamento (UE) 2016/1103, afecta a los Estados¹⁸⁵ que acordaron el mecanismo de cooperación reforzada en relación con esta materia. Estos países los aplicarán a todas las cuestiones suscitadas ante sus tribunales respecto de regímenes económicos matrimoniales que tengan dimensión transfronteriza, independientemente de la nacionalidad o de la residencia de los cónyuges, dado que el Reglamento no exige que ninguna de las partes se encuentre domiciliada en un Estado miembro participante en la cooperación reforzada ni tampoco que lo esté en ningún Estado miembro de la Unión Europea. No se deduce ningún límite subjetivo o personal a la aplicación del presente Reglamento¹⁸⁶.

Por lo tanto, es aplicable: en Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Grecia, Alemania, España, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Chipre. Si bien el resto de los países de la Unión Europea podrán unirse a la normativa en cualquier momento una vez se adopte formalmente.

El régimen temporal está definido en los artículos 69 y 70.2 del Reglamento (UE) 2016/1103¹⁸⁷ y vienen a resumir lo siguiente:

- su entrada en vigor desde el día 29 de julio de 2016, a los veinte días de su publicación (artículo 70) en el *Diario Oficial de la Unión Europea*,

- Desde el inicio del 29 de julio de 2016, serán aplicables los artículos relativos a comunicados de datos de los Estados participantes a la Comisión. Al mismo tiempo se confeccionarán, por parte de la Comisión, los certificados y formularios conocidos en el Reglamento.

- En cuanto a los artículos 63 y 64 se establece su entrada en vigor, el 29 de abril de 2018. Los mencionados artículos redactan la obligación de los Estados miembros a desenvolver una serie de tareas, entre ellas, redactar una información

¹⁸⁵ Cf. P., Peiteado Mariscal, “Competencia internacional” ..., *loc. cit.*, pág. 203: [...] *La cooperación reforzada se articula entre los Estados que se incluyen en la Decisión que autoriza la cooperación reforzada. Además, La participación en la cooperación reforzada no tiene por qué ser inicial, sino que pueden ir incorporándose a ella Estados inicialmente no agregados, en los términos establecidos por el artículo 328.1 TFUE, es decir, siempre que acepten las condiciones inicialmente pactadas en la Decisión de autorización y los actos posteriormente adoptados en su marco.* También considerando núm. 11 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

¹⁸⁶ P., Peiteado Mariscal, “Competencia internacional” ..., *loc. cit.*, pág. 203.

¹⁸⁷ *Vid.* artículos desarrollados en el R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016 relativos al ámbito temporal y también P., Peiteado Mariscal, “Competencia internacional” ..., *loc. cit.*, pp. 304-305.

sobre la legislación y procesos internos en materias del Reglamento (UE) 2016/1103, con el fin de poder acceder mediante la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.

-El presente Reglamento ha entrado en vigor recientemente, este 29 de enero de 2016, ello conlleva a su vez, la aplicación del Reglamento a las acciones judiciales que se ejerciten, a los documentos públicos que se formalicen y las transacciones judiciales aprobadas a partir del 29 de enero de 2019¹⁸⁸ (artículo 69.1).

Y, por último, a todos aquellos Estados miembros que participen en una cooperación reforzada en un futuro, le será aplicable el Reglamento (UE) 2016/1103, a partir de la fecha de la Decisión que faculte su incorporación (artículo 70.2).

B) Análisis respecto a la competencia judicial internacional.

A continuación, vamos a hacer un estudio de la cooperación reforzada en el ámbito de la competencia y realzar los posibles cambios realizados con relación al Reglamento (CE) 2201/2003.

Respecto a la competencia judicial internacional, el Reglamento (UE) 2016/1103, insta una serie de previsiones¹⁸⁹ que serán mencionadas minuciosamente a continuación:

- a) En primer lugar, se impulsa a las partes, en resolver de forma amistosa y extrajudicialmente los posibles conflictos en la materia regulada. Además, se propone como “buena alternativa”, acudir ante un notario, en el Estado miembro escogido, siempre que sea posible en virtud de la ley de dicho Estado miembro.

¹⁸⁸ En palabras de P., Peiteado Mariscal, “Competencia internacional” ..., *opus. cit.*, pág. 305, *los Reglamentos serán igualmente aplicables para el reconocimiento y ejecución de resoluciones dictadas después del 29 de enero de 2019 aunque las acciones judiciales se hubiesen ejercitado antes de esa fecha, pero solo si el tribunal que las dictó resultaría también competente para hacerlo conforme a los Reglamentos, es decir, se atribuyó competencia sobre la base de reglas de competencia conformes con las que los Reglamentos establecen (artículo 69.2).*

En cuanto a las disposiciones del capítulo III, que regulan la ley aplicable (serán explicadas con detalle a continuación, en el apartado de Ley aplicable) *solo pueden afectar a los cónyuges que hayan establecido dicha ley a su régimen económico matrimonial después del 29 de enero de 2019 (artículo 69.3).*

¹⁸⁹ *Vid.* J. C., Fernández Rozas, “Un hito más en la comunitarización” ..., *loc. cit.*, pp. 11-12, Capítulo III. Apartado tercero. También Diario la Ley. “Comentario al Reglamento” ..., *loc. cit.*, para relacionar lo explicado por Fernández Rozas en su artículo citado.

- b) En segundo lugar, se instaura unas pautas para elegir el órgano jurisdiccional competente, pudiendo sustanciarse los procedimientos conexos ante los órganos jurisdiccionales de un mismo Estado miembro. Asimismo, desarrolla el término de “órgano jurisdiccional” conocido hasta hora, como “*toda autoridad judicial y todas las demás autoridades y profesionales del Derecho con competencias en materia de regímenes económicos matrimoniales y que ejerzan funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de una autoridad judicial o bajo su control*”.¹⁹⁰
- c) En tercer lugar, incorpora una técnica centralizadora, basada esencialmente en la reducción de costes, tendentes a que un solo Tribunal centralice los distintos procedimientos de divorcio, separación y liquidación del régimen económico matrimonial, coordinándose para ellos sus normas con las de otros instrumentos comunitarios. Dichas pautas determinan un ámbito de aplicación universal, por lo que se ponen en marcha no sólo si el demandado posee la residencia habitual en un Estado de la Unión Europea sino también si reside en un tercer Estado. Así pues, se sobreentiende la sustitución de las reglas del Reglamento (UE) 2016/1103 por las normas estatales en las materias que se incluyan dentro de su ámbito de aplicación.¹⁹¹
- d) En cuarto lugar, FERNÁNDEZ ROZAS¹⁹² alude al particular sistema de foros de competencia¹⁹³. En cualquier caso, resulta necesario diferenciar entre:

¹⁹⁰ Vid. Artículos 3 al 10 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016 relativo a las definiciones y casos de competencia.

¹⁹¹ Vid. J. C., Fernández Rozas, “Un hito más en la comunitarización” ..., *loc. cit.*, pág. 12, Capítulo III. Apartado tercero. También el artículo 5 relativo a la “Competencia en caso de divorcio, separación judicial...” del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

¹⁹² Capítulo III. Apartado cuarto de J. C., Fernández Rozas, “Un hito más en la comunitarización” ..., *loc. cit.*, pág. 12.

¹⁹³ También P., Peiteado Mariscal, “Competencia internacional” ..., *loc. cit.*, pág. 308 hace referencia a dos técnicas distintas que el Reglamento (UE) 2016/1103 utiliza para “establecer los criterios conforme a los que los tribunales de los Estados miembros determinarán su competencia para litigios relativos al régimen económico matrimonial que tengan repercusiones transfronterizas”. Un primer criterio de conexidad y economía procesal y un complicado sistema de puntos de conexión, en el que algunos elementos se relacionan de forma alternativa y otros de

A) Competencia en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges.

B) Competencia en caso de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio (con reseña al Reglamento (CE) 2201/2003 ya analizado), que se basa como regla general en el acuerdo de los cónyuges.

C) Competencia en otros casos, a partir del establecimiento de foros de competencia judicial basados en la proximidad, designando los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:

a) en cuyo territorio tengan los cónyuges su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional, o, en su defecto,

b) en cuyo territorio hayan tenido los cónyuges su última residencia habitual, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional, o, en su defecto,

c) en cuyo territorio tenga el demandado su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional, o, en su defecto,

d) de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional. Al lado de estos foros, el art. 8¹⁹⁴ fija la competencia basada en la comparecencia del demandado; con carácter excepcional, el art. 9¹⁹⁵ determina una competencia alternativa y, finalmente, el art. 10¹⁹⁶ establece una competencia subsidiaria.

e) En último lugar, en palabras de FERNÁNDEZ ROZAS¹⁹⁷ el Reglamento (UE) 2016/1103:

Refleja, en lo que atañe «normas de aplicación» un condicionamiento de las soluciones incorporadas al «sistema Bruselas I», incluyendo al efecto el *forum necessitatis* en casos excepcionales, la litispendencia y la conexidad, la verificación de oficio de la competencia, y la verificación de la demanda cuando el demandado no comparezca (con una marcada protección hacia los residentes en un Estado miembro), y regulando también el supuesto de las medidas cautelares, cuya aplicación no está exento de dificultades en la práctica.

manera subsidiaria (se alude a los artículos 6 a 11 del presente Reglamento), cuando la conexidad no existe o no es aplicable.

¹⁹⁴ Vid. Artículo 8 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

¹⁹⁵ Vid. Artículo 9 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

¹⁹⁶ Vid. Artículo 8 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

¹⁹⁷ J. C., Fernández Rozas, “Un hito más en la comunitarización” ..., *loc. cit.*, pág. 12, Capítulo III. Apartado tercero.

Dicho lo cual, se prevé un *forum necessitatis* que permita a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro resolver, con carácter excepcional, sobre un régimen económico matrimonial que tenga una estrecha conexión con un tercer Estado, se regula la litispendencia para evitar que se dicten resoluciones inconciliables en Estados miembros distintos, se establecen unas normas armonizadas en materia de conflicto de leyes a fin de evitar resultados contradictorios, y por último, con el fin de que los cónyuges conozcan previamente cuál será la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, se instituyen unas normas armonizadas en materia de conflicto de leyes impidiendo así, resultados contradictorios.¹⁹⁸

C) Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones y documentos públicos y transaccionales¹⁹⁹.

Tal y como manifiesta QUINZÁ REDONDO²⁰⁰ se procederá a aplicar el régimen de reconocimiento y ejecución de resoluciones y aceptación y ejecución de documentos públicos y transacciones judiciales previsto en el Reglamento (UE) 2016/1103, “*cuando el Estado de origen y destino sean distintos, de acuerdo con las limitaciones de los Estados miembros a que se ha hecho mención al definir el ámbito de aplicación territorial del Reglamento*”. En cambio, la valoración del elemento de extranjería se hace en sede de competencia judicial internacional, mediante el cual, se evalúa en “*qué foro pueden o deben litigar las partes teniendo en cuenta la conexión de éstas y del supuesto con varios Estados*”.

Indicar también, que el presente Reglamento (UE) 2016/1103 presenta un modelo de reconocimiento y ejecución de resoluciones y aceptación y ejecución de documentos públicos en línea con la redacción del Reglamento Bruselas I y con las particularidades introducidas por el Reglamento sobre sucesiones²⁰¹.

¹⁹⁸ El Considerando núm. 41 del (R) (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016 prevé un *forum necessitatis* para evitar las situaciones de denegación de justicia.

¹⁹⁹ *Vid.* R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016, Capítulo IV relativo al reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones (regulado en los artículos 36 a 57) y Capítulo V relativo a los documentos y transacciones judiciales (regulado en los artículos 58 a 60).

²⁰⁰ P., Quinzá Redondo. “La unificación -fragmentada- del derecho internacional privado de la unión europea en materia de régimen económico matrimonial: el reglamento 2016/1103”, *Revista General de Derecho Europeo* 41, núm. 41, enero de 2017, pág. 216.

²⁰¹ *Ibidem*.

A continuación, procedemos a indicar las principales novedades y contenidos en cuanto al:

-Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones:

El presente Reglamento, iniciando por reconocimiento, establece que las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de seguir procedimiento alguno²⁰².

Ahora bien, según el Reglamento (UE) 2016/1103 hay que tener en cuenta los siguientes motivos de denegación²⁰³ del reconocimiento de una resolución²⁰⁴:

a) Si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro en que se solicita.²⁰⁵

b) Cuando la resolución se haya dictado en rebeldía del demandado, si no se le hubiere notificado la demanda o documento equivalente con tiempo suficiente y de forma tal que le permitiera preparar su defensa, salvo que el demandado no hubiera recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo.²⁰⁶

c) Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un procedimiento entre las mismas partes en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento.²⁰⁷

d) Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en un litigio, en otro Estado miembro o en un tercer Estado, con el mismo objeto y entre las mismas partes, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento.²⁰⁸

Dicho lo cual, se deduce una prohibición en cuanto al control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen. Asimismo, las resoluciones dictadas en un Estado miembro no podrán ser en ningún caso objeto de revisión en cuanto al fondo.²⁰⁹

²⁰² Vid. artículo 36 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

²⁰³ Vid. artículo 37 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

²⁰⁴ Cf., J. C., Fernández Rozas, “Un hito más en la comunitarización” ..., *loc. cit.*, pág. 14, Capítulo III. Apartado tercero § 22.

²⁰⁵ Artículo 37 letra a) del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

²⁰⁶ Artículo 37 letra b) del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

²⁰⁷ Artículo 37 letra c) del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

²⁰⁸ Artículo 37 letra d) del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

²⁰⁹ Artículos 39 y 40 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

En cuanto a la “ejecución material”, se requiere de una previa declaración de fuerza ejecutiva, es decir, del *exequatur*.²¹⁰ Para ello, solamente debemos presentar a las autoridades del Estado miembro requerido una copia de la resolución y una certificación expedida por las respectivas autoridades competentes del Estado de origen (artículo 45.3 del Reglamento (UE) 2016/1103), y se concede el *exequatur* de manera directa²¹¹.

Y por lo que respecta al sistema de recursos, es posible presentar un recurso contra la resolución sobre la solicitud de fuerza ejecutiva²¹² y, ulteriormente, impugnar la resolución sobre el recurso²¹³.

-Documentos públicos y transaccionales²¹⁴:

El presente Reglamento dispone que los documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en el Estado miembro de origen, o el efecto más parecido posible, siempre que ello no sea manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro de que se trate.

En cuanto a las transacciones judiciales²¹⁵, su regulación es equivalente a la de la fuerza ejecutiva de los documentos públicos, es decir, resulta necesario obtener el *exequatur* para poder instar la ejecución material, manteniéndose el orden público como única causa en que puede fundamentarse el recurso contra la solicitud que resuelve la declaración de fuerza ejecutiva y contra el recurso que se presente, a su vez, contra este último ²¹⁶.

²¹⁰ Artículo 42 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

²¹¹ P., Quinzá Redondo. “La unificación” ..., *loc. cit.*, pág. 218, al concederse el *exequatur* de manera directa, no se puede examinar los motivos de denegación del reconocimiento (orden público, rebeldía del demandado e inconciliabilidad de soluciones (artículo 38 del Reglamento (UE) 2016/1103)).

²¹² Artículo 49 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

²¹³ Artículo 50 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

²¹⁴ *Vid.* artículos 58 a 60 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

²¹⁵ P., Quinzá Redondo. “La unificación” ..., *loc. cit.*, pág. 219.

²¹⁶ Artículo 60 del R (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 8 de julio de 2016.

V. Conclusiones.

En Derecho Internacional Privado, cada vez con una mayor frecuencia la regulación, tanto en el ámbito de la competencia judicial internacional como del derecho aplicable, procede de fuente institucional, en este caso, de Reglamentos comunitarios directamente aplicables, es por lo que algunos autores aluden a la denominada “comunitarización” de este sector. En el ámbito de la separación y el divorcio cuando las relaciones jurídicas revisten un carácter internacional, plantean diferentes problemáticas, dada la multiplicidad de instrumentos de regulación y, la complejidad que revisten las crisis matrimoniales. Es por ello por lo que en este Trabajo de Fin de Máster nos hemos centrado en el análisis de la normativa vigente al respecto y en la problemática que pueda suscitar su ámbito de aplicación.

En primer lugar, destaca el Reglamento (CE) núm. 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. En segundo lugar, hemos incluido el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo de 24 de junio de 2016, que establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.

Al mismo tiempo es necesario tener presente el Derecho de fuente autónoma en materia de separación judicial y divorcio con el fin de comprender mejor los objetivos planteados en el sector de la competencia judicial.

Tras el análisis de los instrumentos antes mencionados, la primera conclusión a la que llegamos es que, aunque gracias al Reglamento Bruselas II *bis* disfrutamos de un doble régimen en el derecho internacional privado español, éste al ser directamente aplicable entre los Estados miembros, constituye el régimen preferente para determinar la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles en las causas de separación y divorcio, esto supone una limitación de la autonomía de la voluntad de elección de foro de los cónyuges.

Más concretamente, el artículo 3 del Reglamento Bruselas II *bis* regula siete foros de competencia en materia matrimonial que deben seguir los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro para asumir la competencia en materia de nulidad, separación judicial y divorcio. El criterio principal de dichos foros es el de la residencia habitual. De forma que el de la nacionalidad sólo opera en el caso de que los cónyuges tengan la misma

nacionalidad. Se busca con ello, una conexión que refleje una vinculación real y efectiva de la relación conyugal, es decir donde los cónyuges han tenido el “centro efectivo de vida”.

Estos foros son alternativos, esto significa que no existe prevalencia entre unos y otros, y ninguno es considerado excepcional. También se refleja que el Reglamento no determina la existencia de una conexión comunitaria para aplicarse. Esta situación ha dado lugar a una serie de críticas por parte de la doctrina española, así como a la pronunciación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a diversas cuestiones prejudiciales como consecuencia de posibles confusiones o contradicciones tras la redacción de su articulado.

La labor de la jurisprudencia europea y española ha sido de vital importancia a la hora de aclarar dichas cuestiones. Es preciso destacar aquí la conocida sentencia “*Hadady*” que interpreta el foro de la nacionalidad común de los cónyuges en el supuesto de nacionalidad múltiple, así como el llamado Asunto “*Sundelind*”, que sirve como precedente para casos en los que exista un demandante nacional y residente en un Estado tercero.

Por otro lado, uno de los artículos que suscita mayor controversia es el artículo 19 en relación con el artículo 16, los cuales, hacen referencia a la problemática de la litispendencia y acciones dependientes, así como, a la determinación del concepto <<iniciación del procedimiento>> que cada Estado miembro aplica a la hora de analizar su competencia en un asunto.

Según algunos autores, la redacción de este puede dar lugar a la posibilidad de presentar demandas que no tienen el mismo objeto ni la misma causa ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros. En este sentido, es de suma importancia resoluciones emanadas del TJUE como *STJUE* (Sala Tercera), de 6 de octubre de 2015 en el asunto C-489/14 respecto a la petición de decisión prejudicial planteada por la Hugh Court of Justice (England and Wales), Family Division (Reino Unido). Hemos citado esta sentencia porque fue uno de los primeros asuntos que permitió al TJUE examinar una situación marcada por la dualidad del procedimiento de <<crisis matrimonial>> en el Estado francés y, a su vez, por la iniciación en dos Estados miembros diversos de procedimientos paralelos de divorcio poco antes e inmediatamente después de la caducidad de un procedimiento de separación. En estas circunstancias descritas, el TJUE ha resuelto que no cabe establecida la competencia del tribunal del primer Estado miembro para conocer de la demanda de divorcio.

Lo que ocurre es que estos artículos parecen resolver las situaciones de litispendencia, sin embargo, la doctrina española considera que no cumple con el propósito de garantizar la seguridad jurídica ni con el objetivo de evitar acciones paralelas con posibles resoluciones incompatibles.

El Reglamento Bruselas II bis, por otra parte, lo hemos comparado con el Derecho Internacional privado autónomo regulado en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el caso de que el derecho interno fuera aplicable. Esto sucede cuando el demandado no es nacional comunitario y ningún tribunal comunitario es competente según los términos del Reglamento.

Importante la labor de estudio que hace el Prof. Espinar a analizar la regulación jurídica del tráfico transfronterizo en España. En este caso, determina las principales diferencias entre los textos del artículo 22 de la LOPJ y artículos 3,4 y 5 del Bruselas II bis en. Por consiguiente, explica como ciertos foros de competencia, a saber, el foro de residencia habitual del demandado carece de sentido en nuestro ordenamiento pues, en el ámbito de la jurisdicción voluntaria no se produce esta posición procesal, y plantea la posibilidad de *“dotar de unas normas de competencia judicial internacional propias a las cuestiones recogidas en el artículo 90 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, distintas y diferenciales a las de la quiebra de la relación matrimonial.”*.

La segunda conclusión a la que llegamos es que, tras el análisis y revisión de lo expuesto en este trabajo, es que la Unión Europea está realizando un gran esfuerzo por lograr el objetivo de crear un espacio común de libertad y seguridad para sus ciudadanos. En este sentido, recientemente aprobó el Reglamento (UE) 2016/1103, con la finalidad de reunir el conjunto de normas aplicables a los regímenes económicos matrimoniales, con las que proporcionar la seguridad jurídica y la previsibilidad que necesitan las parejas casadas con relación a su patrimonio, antes de que se produzca la crisis matrimonial.

Dicho Reglamento adopta una serie de mecanismos en el ámbito de cooperación judicial. Concretamente, en asuntos civiles de los regímenes económicos matrimoniales con proyección transfronteriza, independientemente de la nacionalidad o residencia de los cónyuges. Esto tiene como finalidad conseguir el buen funcionamiento del mercado interior, determinando las autoridades judiciales competentes para resolver el asunto y facilitando la circulación de sentencias y de documentos públicos en este ámbito.

El régimen económico matrimonial contiene disposiciones en materia de competencia, y reconocimiento, o en su caso, aceptación, fuerza ejecutiva y ejecución de

resoluciones, documentos públicos y transacciones judiciales, en la línea de los Reglamentos comunitarios de última generación (por ejemplo, en materia de sucesiones).

Por otro lado, como novedades respecto a los Reglamentos Bruselas II bis introduce: diferentes procedimientos conexos para que se sustancien ante los órganos jurisdiccionales de un mismo Estado miembro; enumera de forma exhaustiva los motivos por los que se podrá ejercer la competencia subsidiaria con el fin de rectificar situaciones de denegación de justicia; prevé un *forum necessatis* para permitir a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro resolver sobre un régimen económico matrimonial que tenga estrecha conexión con un tercer Estado; regula la litispendencia para evitar resoluciones inconciliables en Estados miembros distintos; impulsa a las partes en resolver de forma amistosa y extrajudicialmente los posibles conflictos en la materia (ante los notarios); incorpora una técnica centralizadora, basada esencialmente en la reducción de costes, tendentes a que un solo Tribunal centralice los distintos procedimientos de divorcio, separación y liquidación del régimen económico matrimonial, coordinándose para ellos sus normas con las de otros instrumentos comunitarios.

Para finalizar, respecto a la situación del divorcio y separación judicial en el ámbito internacional, hemos comprobado que se ha producido una evolución positiva en la intención de unificar y dar coherencia a las normas existentes, mediante instrumentos que refuerzan la cooperación judicial internacional en materia la competencia judicial y Ley aplicable, pero la realidad es que, todavía hace falta un mayor compromiso y voluntad por parte de los Estados en eliminar las diversidades de los Derechos Estatales y los conflictos de civilizaciones.

V. Bibliografía

- **Libros**

- A. L., Calvo Caravaca y J., Carrascosa González, *Derecho Internacional Privado Vol. II*, Granada, Comares (octava edición), 2007.
- A. P., Abarca Junco (Dir.), *et alii*, *Derecho Internacional Privado Vol. I*, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2008,
- *Derecho Internacional privado Vol. II Derecho civil internacional*, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2010.
- J. C., Fernández Rozas y S., Sánchez Lorenzo (directores), *Derecho Internacional Privado*, Navarra, Civitas (novena edición), 2016.
- J. C., Fernández Rozas y P. A., De Miguel Asensio, *Derecho Internacional Privado. Textos y Materiales*, Navarra, Civitas (séptima edición), 2018.
- J. M., Espinar Vicente, *Doce reflexiones sobre el Derecho internacional privado español*, Liceus Derecho Internacional, 2014,
- *Tratado elemental de derecho internacional privado*, Madrid, Universidad de Alcalá 2008.
- *La regulación jurídica del tráfico transfronterizo en España (Análisis crítico de la nueva ordenación)*, Liceus Derecho, 2016.

- **Legislación y jurisprudencia.**

- Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, *Diario Oficial de la Unión Europea*, 30 de marzo de 2010, núm. 83, páginas 389 a 403 (15 págs.) Artículo 21
- Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, *Diario oficial de la Unión europea*, 30 de marzo de 2010, núm. 83, Ref. DOUE-Z-2010-70006, páginas 47 a 199. Artículos 81, 83, 331, 381.
- Unión Europea. Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1347/2000. *Diario oficial de la Unión Europea* de 23 de diciembre de 2003 núm. 338, páginas 1 a 29.
- Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales. *Diario oficial de la Unión Europea*, de 8 de julio de 2016, núm. 183, páginas 1 a 29.

-España. Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, *Boletín Oficial del Estado*, de 30 de abril de 1977, núm. 103, páginas 9337 a 9343 (7 págs.)

-España. Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente, *Boletín Oficial del Estado*, de 10 de octubre de 1979, núm. 243, páginas 23564 a 23570 (7 págs.)

-España. Constitución Española, *Boletín Oficial del Estado*, de 29 de diciembre de 1978, núm. 311.

-España. Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, *Boletín Oficial del Estado*, de 3 de julio de 2015, núm. 158.

-España. Real decreto de promulgación de la Ley de Enjuiciamiento civil. *Boletín Oficial del Estado*, de 5 de febrero de 1881, núm. 36, páginas 326 a 329 (4 págs.).

-España. Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, *Boletín Oficial del Estado*, de 31 de julio de 2015, núm. 182, páginas 65906 a 65942 (37 págs.)

-España. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. *Boletín Oficial del Estado*, 8 de enero de 2000, núm. 7, páginas 575 a 728 (154 págs.).

-España. Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil. *Boletín Oficial del Estado*, de 25 de julio de 1889, núm. 206, páginas 249 a 259 (11 págs.).

-España. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. *Boletín Oficial del Estado*, del 2 de julio de 1985, núm. 157, páginas 20632 a 20678 (47 págs.)

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Hadidi. Sentencia de 16 julio 2009, as. C-168/08, Laszlo Hadadi (Hadady) vs. Csilla Marta Mesko. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72471&pageIpage=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931> [Consultado el 14 de abril de 2017]

-Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Sundelind. Sentencia de 29 de noviembre de 2007. STJUE 29 noviembre 2007, as. C-68/07, Kerstin Sundelind Lopez vs. Miguel Enrique López Lizazo.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70753&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931>

[Consultado el 3 de junio de 2017]

-Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso 489/14, A. vs B. Sentencia de 6 de octubre de 2015. *STJUE* (Sala Tercera), de 6 de octubre de 2015 en el asunto C-489/14.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169196&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931>

[Consultado el 17 de septiembre de 2017]

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C- 489/2014, A. vs B. Conclusiones del Abogado General Pedro Cruz Villalón presentadas el 8 de septiembre de 2015. TJUE Conclusiones del Abogado as. C-489/2014, A. vs. B., de 8 de septiembre de 2015

Disponible en:

<file:///C:/Users/ASUS/Documents/DOCUMENTOS%20TFG/TFM/TJUE/litispendencia%20y%20conexidad%20conclusiones%20del%20abogado.pdf>

[Consultado el día 10 de enero de 2018]

- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-173/2016, M.H vs. M.H. Auto de 22 de junio de 2016. ATJUE (Sala Sexta), de 22 de junio de 2016 en el as. C-173/5016.

- España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Sentencia núm. 5223/2015 de 16 de diciembre de 2015. Disponible en CENDOJ nº de Recurso 2015/2013. STS de 16 de diciembre de 2015 nº 5223/2015 en relación con *STS* (Sala Primera), de 16 diciembre nº 710/2015.

- España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Sentencia núm. 710/2015 de 16 de diciembre de 2015. *STS* (Sala Primera), de 16 diciembre nº 710/2015.

<http://vlex.com/vid/590784158> [Consultado el 18 de septiembre de 2017]

- Audiencia Provincial de León, Sección Primera, Sentencia nº 203/2015 de 27 de noviembre de 2015. SAP León de 27 de noviembre de 2015 nº 203/2015.

<http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7343645&links=Divorcio&optimize=20150408&publicinterface=true>

[Consultado el día 9 de enero de 2018]

- Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Tercera, Sentencia nº 1492/2017 de 20 de diciembre de 2017. Disponible en CENDOJ nº

de Recurso 720/2017. SAP Palmas de Gran Canaria (Las) de 20 de diciembre de 2017 nº 1492/2017.

- Audiencia Provincial de Barcelona, Sección decimoctava, Auto nº 623/2018 de 13 de marzo de 2018. Disponible en CENDOJ nº de Recurso 623/2018. AAP de Barcelona de 13 de marzo de 2008 nº 626/2018.

- Audiencia Provincial de Barcelona, Sección doceava, Auto nº 6904/2018 de 12 de noviembre de 2018. Disponible en CENDOJ nº de Recurso 1261/2018. AAP de Barcelona de 12 de noviembre de 2018 nº 6904/2018.

- Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, Auto nº 515/2018 de 18 de mayo de 2018. Disponible en CENDOJ nº de Recurso 110/2018. AAP de Tarragona de 18 de mayo de 2018 nº 515/2018.

- Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, Auto nº 531/2018 de 18 de octubre de 2018. Disponible en CENDOJ nº de Recurso 523/2018. AAP de Lleida de 18 de octubre de 2018 nº 531/2018.

- Audiencia Provincial de Córdoba, Sección Primera, Sentencia nº 590/2018 de 6 de marzo de 2018. Disponible en CENDOJ nº de Recurso 4/2018. SAP de Córdoba de 6 de marzo de 2018 nº 590/2018.

- Audiencia Provincial de Girona, Sección Primera, Sentencia nº 260/2016 de 12 de marzo de 2013. Disponible en CENDOJ nº de Recurso 12/2013. SAP de Girona de 12 de marzo de 2013 nº 260/2016.

- Audiencia Provincial de Girona, Sección Tercera, Sentencia nº 1492/2017 de 20 de diciembre de 2017. Disponible en CENDOJ nº de Recurso 720/2017. SAP de Girona de 20 de diciembre de 2017 nº 1492/2017.

- Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Cuarta, Sentencia nº 697/2016, de 23 de noviembre de 2016. SAP de A Coruña de 23 de noviembre de 2016 nº 697/2016.

Disponible en: <https://www.iberley.es/print/sentencias/47725191>

[consultado noviembre de 2018]

- **Páginas webs.**

- A. Quiñones Escámez. “¿Cuándo se aplica el Reglamento Bruselas II bis? El TJCE se pronuncia sobre su ámbito de aplicación”, Madrid, publicado en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, ISSN 1138-4026 número 30, Mayo/Agosto, 2008, pp. 457-482. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2700404> [Consultado el 27 de abril de 2017]

-A., Ortega Giménez. “Crisis matrimoniales: Competencia judicial internacional y determinación de la Ley aplicable en casos de nulidad matrimonial, separación de hecho, separación judicial y divorcio”, *Revista de Derecho vLex*, Núm. 97, febrero 2012. Disponible en:

<https://app.vlex.com/#ES/search/jurisdiction:ES/SAP+Murcia+8+noviembre+1999%2C+foro+del+domicilio+del+demandado/p2/ES/vid/351646613>

[Consultado el 5 de septiembre de 2017]

-E., Trigo Sierra y M.^a E., Pérez-Pujazón. “Las Reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2015”, *Actualidad jurídica Uría Menéndez*, Núm. 42, 2016, págs. 31-44. Disponible en:

<http://www.uria.com/documentos/publicaciones/4963/documento/art03.pdf?id=6212>

[Consultado el 18 de septiembre de 2017]

- Comisión Europea. “Guía Práctica para la aplicación del Nuevo Reglamento Bruselas II”, Unión Europea, 2014. Disponible en: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/brussels_ii_practice_guide_es.pdf

[Consultado el 30 de marzo de 2017]

- Diario la Ley. “Comentario al Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo de 24 de junio de 2016 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales”, en *Diariolaley* (D.O.U.E.L. de 8 de julio de 2016). Disponible en:

<http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNDY2NLM7Wy1KLizPw8WyMDQzMDcwMLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAPFEB-I1AAAAWKE> [Consultado el 11 de septiembre de 2017]

- J. C., Fernández Rozas. “Un hito más en la comunitarización del Derecho internacional privado: regímenes económicos matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas”, *La Ley Unión Europea*, núm. 40, 30 de septiembre de 2016, Año IV, Editorial La Ley. Disponible en:

<file:///G:/régimen%20económico%20matrimonial.pdf> [Consultado 12 de septiembre de 2017]

- Noticias jurídicas. “Contenido y novedades del Reglamento (UE) 2016/1103, de 24 de junio, sobre regímenes económicos matrimoniales”, en *Noticias Jurídicas*. Disponible en:

<http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11199-contenido-y-novedades-del-reglamento-ue-2016-1103-de-24-de-junio-sobre-regimenes-economicos-matrimoniales/> [Consultado el 22 de mayo de 2017]

- P., Quinzá Redondo. “La unificación -fragmentada- del derecho internacional privado de la unión europea en materia de régimen económico matrimonial: el reglamento 2016/1103”, *Revista General de Derecho Europeo* 41, núm. 41, enero de 2017, pp. 180-222. Disponible en:

<file:///G:/reglamento%202016.1103.pdf> [Consultado 12 de septiembre de 2017]

- P. Orejudo Prieto de los Mozos. “Diez años de aplicación e interpretación del Reglamento Bruselas II bis sobre crisis matrimoniales y responsabilidad parental (análisis de los aspectos de competencia judicial internacional)”, publicado en *La Ley. Unión Europea*, núm. 21, 2014, pp. 5-22. Disponible en:

<http://eprints.ucm.es/27863/1/Bruselas%20II%20bis%2010%20a%C3%B1os.pdf> [Consultado el 9 de mayo de 2017]

- P., Peiteado Mariscal. “Competencia internacional por conexión en materia de régimen económico matrimonial y de efectos patrimoniales de uniones registradas. Relación entre los reglamentos UE 2201/2003, 650/2012, 1103/2016 y 1104/2016”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 9, Nº 1, pp. 300-326 ISSN 1989-4570,

<https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/3623/2192> [Consultado el 15 de mayo de 2017]